

**GARANTIAS PROCESALES DE LAS VICTIMAS EN LA ETAPA DE
INDAGACIÓN Y JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO, LEY
906 DEL 2004.”**

MARIO ARLEY RUBIO BARRERA



**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
ESPECIALIZACION DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
COHORTE VI
PEREIRA
2012**

**“GARANTIAS PROCESALES DE LAS VICTIMAS EN LA ETAPA DE
INDAGACIÓN Y JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO, LEY
906 DEL 2004.”**

MARIO ARLEY RUBIO BARRERA

**Trabajo de investigación como requisito para optar al título de
Especialista en Derecho Penal y Criminología.**

**Asesor de Investigación:
JHONIER CARDONA SALAZAR**

**Asesor Temático:
Mg. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA
COORDINADOR ACÁDEMICO POSGRADOS EN DERECHO.**



**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
ESPECIALIZACION DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
COHORTE VI
PEREIRA
2012**

Nota de aceptación

Asesor

Asesor

Pereira, Octubre de 2012.

CONTENIDO

Pág.

1.	INTRODUCCION	5
2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
3.	PROPOSITO	8
4.	HIPOTESIS	9
5.	JUSTIFICACION	10
6.	OBJETIVOS	11
6.1	GENERAL	11
6. 2.	ESPECIFICOS	11
7.	RESULTADOS ESPERADOS	12
8.	ESTADO DEL ARTE	13
9.	MARCO TEORICO	16
10.	MARCO JURIDICO	17
11.	ESTRATEGIA METODOLOGICA	20
12.	CONCEPTO DE VÍCTIMA EN EL CONTEXTO LEGAL	21
13.	CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA JURISPRUDENCIA	22
14.	CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA DOCTRINA	24
15.	FACULTADES DE LA VÍCTIMA EN LA INDAGACIÓN	26
16.	FACULTADES DE LA VÍCTIMA EN EL JUICIO ORAL	30
17.	JUSTIFICACIONES CONSTITUCIONALES PARA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO	33
18.	DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA	37
19.	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN OTRAS ETAPAS PROCESALES Y DE CARA A LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONA	42
20.	CONCLUSIONES	54
	BIBLIOGRAFIA	

GARANTIAS PROCESALES DE LAS VÍCTIMAS EN LA INDAGACIÓN Y JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO, LEY 906 DEL 2004.

1. INTRODUCCION

Partiendo de la relevancia que desde el punto de vista constitucional y legal ostentan las víctimas dentro del proceso penal, resulta imprescindible analizar el sistema normativo colombiano a fin de identificar los mecanismos con los que cuentan para materializar sus derechos en las diferentes etapas procesales, en procura de garantizar un verdadero y efectivo acceso a la administración de justicia.

A pesar de los avances legislativos y la teleología perseguida en la Ley 906 de 2004, en la que se pretendió involucrar a la víctima, como un sujeto central en desarrollo de la acción penal, pretendiendo otorgar un status especial, lo cierto es, que en la práctica se incurrió en omisiones legislativas relativas y absolutas, que se han traducido en ideales paradójicos en un Estado democrático y participativo, que propende por la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten.

Desde esta óptica, la jurisprudencia del máximo Tribunal, se convierte en un referente indispensable para observar el estado del arte en el ejercicio de los derechos de las víctimas desde las etapas preliminares, comparado con la normatividad en decadencia jurídica consagrada en la Ley 600 de 2000, siendo entonces la Corte Constitucional la autoridad que ha venido reivindicando sus derechos mediante una interpretación armónica con los postulados constitucionales, y que se enmarquen dentro de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en los Tratados y Convenios Internacionales, referentes a los derechos de las víctimas en el proceso penal.

No es fácil abordar la temática teniendo en cuenta la abundante producción jurisprudencial y doctrinaria, más aún cuando se propende por la mínima intervención de otros sujetos procesales, en procura de mantener un equilibrio entre parte acusadora y parte acusada para que el sistema penal de tendencia acusatoria no se desvirtúe.

Alegar un mayor espectro jurídico para que las víctimas ejerzan sus derechos de forma real y material, sería contraproducente de cara al principio de igualdad de armas como sostienen muchos, a pesar de ello, una tesis como ésta no comporta una verdadera identidad o compatibilidad con los principios, valores, garantías y derechos que inspiran el ordenamiento jurídico colombiano. Se debe administrar justicia con plenas garantías para el sujeto pasivo de la acción penal, pero sin dejar mutilado o restringido el campo de acción jurídica de quien ha soportado la ocurrencia del delito.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, modificó sustancialmente la forma de administrar justicia en materia penal, estipulando como elementos medulares la justicia consensuada, la oralidad, la inmediatez en la producción de la prueba entre otros aspectos y elevó como principio rector angular los derechos de las víctimas

Aunque en el recuento que hace la Corte Constitucional sobre lo que ha sido la evolución de su jurisprudencia en relación con las víctimas del delito y sus derechos se alude al sistema procedimental penal de tendencia acusatoria y a la forma en que dentro de él se garantiza el acceso de las víctimas a los mecanismos mediante los cuales puede ejercitar sus derechos a reparación, verdad y justicia, no está de más hacer algunas acotaciones al respecto.

En este sentido ha de recordarse que el nuevo sistema procedimental penal fue expedido por virtud de la reforma constitucional que se introdujo mediante el Acto Legislativo nº 03 de 2002, el cual, como puede establecerse al consultar su tenor literal, en parte alguna establece que el sistema procedimental por implementarse debe ser de corte adversarial o que debe tener como característica fundamental la de ser adversarial.

A pesar que el legislador es contundente en darle un espacio basilar a la víctima del delito, paradójicamente en el plexo normativo se la dejó sin instrumentos eficaces, efectivos y materiales para poder ejercer sus derechos, incluso en un franco o abierto retroceso si se compara el sistema procesal vigente con la Ley 600 de 2000, que a la postre nunca consagró una cláusula normativa como la que está estipulada en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 sobre los derechos de las víctimas.

En este orden de ideas, se puede afirmar que el legislador, al desarrollar la intervención de las víctimas en algunas etapas procesales, como la indagación y la del juicio oral no les concedió plenas facultades para el ejercicio de sus derechos; de tal suerte que los coartó o restringió sin justificación aparente desde una perspectiva teleológica. Esto ha conllevado a la intervención del máximo Tribunal Constitucional que en efecto reafirma esta modesta postura jurídico – académica.

Se trata, pues, de una propuesta en la cual y al contrario de lo adocinado por la Corte Constitucional, se le permite a la víctima el acceso a la administración de justicia (art. 229 C. P.) pero solo para que figure allí como interviniente especial, no para que realmente se le reconozcan sus derechos, y entonces el conocimiento público de los hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y la obligación de reparar los daños causados dejan de ser mecanismos útiles para crear conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causados por el delito, y en esa medida dejan de ser mecanismos de

prevención general y especial del delito, los cuales en otras épocas servían para garantizar que el Estado no apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué garantías procesales tienen las víctimas en las etapas de indagación y juicio oral dentro del proceso penal acusatorio colombiano?

3. PROPOSITO

Esta investigación busca construir una postura o propuesta teórica sobre el alcance y límites de los derechos de las víctimas en el proceso penal acusatorio Colombiano, para que los diferentes sujetos procesales e intervinientes en el proceso, podamos tener mayor conocimiento sobre el ejercicio en aquellos aspectos que han sido reconocidos por la ley y la jurisprudencia.

4. HIPOTESIS

Desde la entrada en vigencia de la ley 906 del 2004 hasta el tiempo transcurrido del año 2012, ley que modificó el sistema penal colombiano y que dio mayores garantías y derechos a la víctima dentro del proceso penal, es evidente que frente a estas potestades aún no se ha ampliado normativamente el campo de acción para su ejercicio en las etapas de indagación y juicio oral en el nuevo sistema penal acusatorio

5. JUSTIFICACION

El presente trabajo que se circunscribe en el campo teórico, porque a partir del estudio, la revisión bibliográfica, y el análisis de sentencias de la Corte Constitucional así como diferentes artículos que han tratado el tema, se presenta una reflexión y cuestionamiento que contribuye a motivar la construcción de instrumentos normativos para la consolidación de los derechos de las víctimas en el proceso penal.

La presente investigación será de gran utilidad en virtud a la trascendencia del tema a efectos de concientizar en el campo académico así como en el mundo jurídico el trato que están recibiendo las víctimas y lograr que esta sea una prioridad en el proceso penal y de la sociedad, para plantear herramientas que permitan un mejor y eficaz ejercicio de sus derechos para que estos sean reconocidos.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar las facultades, instrumentos y mecanismos procesales con los que cuentan las víctimas para reclamar sus derechos de verdad, justicia y reparación en la etapa indagación y juicio oral del sistema penal en Colombia.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Identificar las facultades la víctima en la indagación y juicio oral.
- Establecer las justificaciones constitucionales que se han estructurado para limitar la participación de las víctimas en el proceso penal acusatorio.
- Comparar el reconocimiento de los derechos de las víctimas en otras etapas procesales y de cara a la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que mediante la presente investigación se obtenga gran utilidad en virtud a la trascendencia del tema a efectos de concientizar en el campo académico así como en el mundo jurídico el trato que están recibiendo las víctimas y lograr que esta sea una prioridad en el proceso penal y de la sociedad, para plantear herramientas que permitan un mejor y eficaz ejercicio de sus derechos para que estos sean reconocidos.

Por lo tanto es urgente y necesario ampliar normativamente el campo de acción de las víctimas para el ejercicio de sus garantías, porque no se puede concebir un conjunto normativo que consagre como esencial sus derechos y en la práctica, las deje sin herramientas efectivas. Eso sí es una verdadera falacia jurídica.

8. ESTADO DEL ARTE

- ARTÍCULO ESTADO ACTUAL DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL: Evolución (¿involución?) dogmática, jurisprudencia y legislativa

Después de hacer una recopilación y rememoración sobre los derechos de las víctimas en la vida republicana de Colombia, el autor plantea algunas reflexiones sobre los derechos de las víctimas en la Ley 906 de 2004, dejando al descubierto que el legislador ha sido regresivo al consagrar normas que en lugar de permitir una participación efectiva dentro del proceso penal, limita o restringe el ejercicio de sus prerrogativas dejando su actividad reducida a ciertos actos encaminados a la reparación, posición que de una u otra forma ha sido avalado por los máximos tribunales nacionales.

- ARTÍCULO REVISIÓN TEÓRICA AL PROCESO DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

Se aborda el tema sobre el funcionamiento del sistema penal de cara a la atención que recibe la víctima, quien además del sufrimiento psicológico y físico que padece con ocasión del delito, debe soportar una serie de tratos inhumanos que dan al traste con la expectativa legítima de lograr la justicia, la verdad y la reparación colocando en evidencia una verdadera deficiencia y precario funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de atender a quienes sufren los hechos ilícitos de forma directa o indirecta.

Orth (2002) afirmó en una investigación que *el proceso de justicia criminal genera frecuentemente una victimización secundaria cuyos efectos se evidencian en una pérdida de confianza en el sistema legal*.

Los autores proponen como método para reducir la victimización secundaria una concientización generalizada de las autoridades para que en los diferentes estadios se le brinde una oportuna, adecuada y óptima atención a la víctima partiendo del respeto irrestricto a su dignidad humana.

- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

Realizando una ubicación teórica sobre el contexto constitucional español, desemboca en la armonización que deben tener los derechos de las víctimas así como los del victimario, por cuanto el proceso penal debe ser un canal idóneo para el reconocimiento de las garantías de aquellas, partiendo de sus principios, valores y derechos constitucionales y dándole alcance a la prerrogativa de una tutela judicial efectiva.

En igual sentido se afirma que se trata de un derecho subjetivo público de carácter fundamental, y por lo tanto la ley debe facilitar su ejercicio incorporando mecanismos necesarios para su goce y utilización efectiva, toda vez que los derechos del imputado no deben menoscabar, empañar o restringir los derechos de las víctimas en el proceso penal.

Así mismo se indica que una mala o defectuosa información puede conllevar a una denegación de justicia o tutela con frustración del derecho del ofendido a erigirse en acusador particular, reivindicando una posición autónoma de la víctima en el proceso penal, al punto que debería conocer sobre la libertad del imputado cuando ello afecte de una u otra forma su seguridad personal.

Respecto a la solicitud y práctica de pruebas como derecho fundamental se deben hacer limitaciones pero las mismas deben ser razonables, evitando al máximo la victimización secundaria y conservando el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en virtud a que la función del derecho penal no puede limitarse a la aplicación del ius puniendi entendido como el derecho público a castigar, sino que ha de comprender la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, permitiendo mayor protagonismo las víctimas.

- **ARTICULO LAS VICTIMAS DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL INTERNACIONAL – EL EJEMPLO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

La autora señala que durante siglos el objetivo de la judicialización de los crímenes de guerra era sancionar a los culpables, pero en ningún momento permitir la intervención de las víctimas en los juicios o a obtener indemnización; situación que sufrió un cambio paradigmático con la expedición del estatuto de Roma, pues con ello se acordó otorgar un papel relevante a la víctima en el proceso internacional, rol que fue evolucionando hasta facilitar su intervención como testigo en el juicio o como parte o actor fundamental en el mismo.

Con la creación de la CPI se estableció un concepto de víctima incluyendo a los miembros de la familia, los derechohabientes, introduciendo a su vez límites para evitar que se extienda hacia personas que han sufrido un perjuicio indirecto; y frente a las personas jurídicas las reglas de procedimiento establecen una serie de instituciones susceptibles de ser indemnizadas como lo son las dedicadas a fines humanitarios que se consagran a la religión, a la enseñanza, a las artes y a la ciencia que sufrieren un perjuicio directo.

Como testigos se les da derecho a que la CPI adopte medidas de protección cuando su vida e integridad personal pueda estar en peligro por sus declaraciones; igualmente está establecido que para proteger a las víctimas de abusos sexuales la declaración que rindan no está condicionada a la existencia del contrainterrogatorio, permitiendo que ésta surta su declaración ante un abogado, un representante, un psicólogo o hasta un miembro de la familia y con el

fin de conciliar el conflicto generado con los derechos del implicado, se consagra el testimonio anónimo, bajo circunstancias excepcionales y con la exigencia de unas garantías de procedimiento, a fin de preservar los derechos de inmediación, defensa y contradicción.

Por otro lado, como actores del juicio internacional, se permite a las víctimas participar en las diferentes etapas del procedimiento partiendo de la facultad para incoar el impulso de la investigación, hasta obtener la reparación; se exige al Fiscal el deber de informar a los afectados la realización de las diligencias previas. Del mismo modo y como punto esencial de la revolución planteada por el Estatuto de Roma, no se limita su participación el juicio oral pudiendo intervenir directamente en el juicio si así lo desea, presentar sus observaciones, interrogar a los testigos, presentando una demanda escrita ante la Secretaria de la Corte, quien a través de una de sus salas definirá su participación de acuerdo con las reglas de procedimiento y prueba.

9. MARCO TEORICO

Desde una concepción finalista del derecho, entendiendo que estamos ante normas válidas pero injustas toda vez que a pesar de haber sido proferidas cumpliendo los procedimientos establecidos, en la práctica no se atemperaron al valor de la justicia material, por excluir al principal afectado con la ejecución del delito, de una participación real y efectiva en el proceso penal.

La ley 906 de 2004 consagró la participación de la víctima en el proceso penal estableciendo un plexo de garantías las cuales se desarrollarían esencialmente a través de los actos efectuados por la Fiscalía General de la Nación en procura de resolver la responsabilidad del hecho delictivo; sin embargo, este compendio de garantías no se vio materializado en la ley cuando se limitó su intervención solo a partir de la formulación de la imputación y encontrándose vedada para intervenir durante la etapa del juicio oral para descubrir su teoría del caso, practicar pruebas y presentar alegatos de conclusión.

Desde esta óptica, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional vinieron a dotarla de facultades en el proceso al reconocer su calidad de interviniente especial, debiendo reconocer su calidad a partir de la audiencia de acusación y con la posibilidad de intervenir en la incidente de reparación integral una vez proferida sentencia condenatoria.

Posterior a ello, se determinó la obligación de comunicar sus derechos desde que se tenga contacto con las autoridades, así como otorgarles facultades probatorias en la audiencia preparatoria (C 454 de 2006); del mismo modo se precisó la intervención a partir de la audiencia de formulación de la imputación, para solicitar pruebas anticipadas, solicitar la medida de aseguramiento respectiva que considere, tenerse en cuenta con plenas garantías en la aplicación del principio de oportunidad, así como en el evento de preclusión de la investigación y con plenas facultades en el traslado del escrito de acusación y en la misma audiencia, solicitar medidas de protección ante el juez de control de garantías, entre otros.

Dejando claro que no puede presentar teoría del caso y la participación en el juicio oral deberá realizarse a través de la fiscalía. No se dijo nada sobre la etapa de indagación (C 209 de 2007).

En cuanto a las medidas cautelares solo puedan solicitarse a partir de la imputación (C 210 de 2007) y la Corte determinó la posibilidad de suspender y cancelar registros obtenidos fraudulentamente en cualquier momento pero a petición de la Fiscalía (C 060 de 2008) y vinculó al asegurador a los resultados de la decisión del incidente de reparación integral (C 409 de 2009).

10. MARCO JURIDICO

La regulación legal del objeto de investigación se encuentra establecida en la Constitución Nacional, esencialmente en el Art. 250 modificado por el Acto legislativo 03 de 2002, cuyo desarrollo legal dio lugar a la expedición de la ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal Colombiano.

En cuanto a los pronunciamientos constitucionales relacionados con el tema de las víctimas, tenemos los siguientes:

- La sentencia **C-228 de 2002** profundiza en la reconceptualización de la parte civil dentro del proceso penal ordinario a partir de la Constitución de 1991, realizando un completo estudio de los derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito, y estableciendo que éstos tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria, que es la forma tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un hecho delictivo desarrollando los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la Constitución, y del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente del derecho a la tutela judicial efectiva; se apoya igualmente en una referencia al derecho comparado. En esta decisión se declara exequible el inciso 1° del artículo 137 de la Ley 600 de 2002, en el sentido que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia y ello implica la posibilidad real de participar en las etapas preliminares de la investigación penal.
- En la sentencia **C-578 de 2002**, revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se crea el Estatuto de La Corte Penal Internacional”, se destacan la efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad, como razones políticas para declarar la exequibilidad de la Ley.
- En la sentencia **T- 556 de 2002**, la Corte reiteró la doctrina de los derechos de las víctimas en el proceso, con énfasis en la posibilidad de acceso a la justicia, y la protección de este derecho por vía de tutela cuando resulte vulnerado o amenazado.
- En la sentencia **C- 451 de 2003**, a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de investigación previa.
- En la sentencia **C- 570 de 2003** la Corte realizó un estudio sobre las especiales prerrogativas que se derivan de la constitución de parte civil dentro del proceso penal, en contraste con la reclamación mediante acciones de la jurisdicción civil; prerrogativas que se derivan del plexo de derechos que a las víctimas de los delitos se han reconocido en el ámbito penal (a saber la verdad, a que se haga justicia y a la reparación integral).

- La sentencia **C-775 de 2003** estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 600 de 2000 sobre restablecimiento del derecho. Reiterando la doctrina sobre la trilogía de derechos de que son titulares las víctimas: verdad, justicia y reparación, destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad que persiga un orden justo, y la interdependencia que existe entre ellos, de manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”.
- En las sentencias **C-014 de 2004** y **C-114 de 2004**, la Corte hizo extensivo el concepto de víctima y el alcance constitucional de sus derechos a los afectados por las faltas disciplinarias.
- En la sentencias **C-1154 de 2005** (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa) y **C-1177 de 2005**, la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la ley 600 de 2000, sobre archivo de diligencias (Art.79), e inadmisión de denuncia (Art. 69), condicionando la constitucionalidad a que tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y al denunciante, respectivamente, a fin de preservar sus derechos.
- En la sentencia **C-591 de 2005**, se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 906 de 2004, se destacó en esta sentencia la relevancia de los derechos de las víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado mediante el acto legislativo 03 de 2002.
- En la sentencia **C-979 de 2005** a propósito de la demanda contra los artículos 78, 192.4, 327, 330 y 527 de la Ley 906 de 2004, la Corte realizó un pronunciamiento sobre la protección de las víctimas y los esquemas de justicia distributiva establecidos en el sistema procesal de tendencia acusatoria.
- En la sentencia **C-047 de 2006**, se estudió la constitucionalidad de los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la Ley 906 de 2004, la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre el derecho al non bis in ídem y el debido proceso contenido en la sentencia C-04 de 2003 y C-979 de 2005, señalando que “en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas, desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem.
- Como quiera que la Ley 906 de 2004, omitió incluir a las víctimas como sujetos o intervinientes con posibilidad de solicitar pruebas en igualdad de condiciones que la defensa, la fiscalía y el ministerio público, en la sentencia **C-454 de 2006** la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 357 del código de procedimiento penal, en el entendido que la víctima también puede realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria.

- En la sentencia **C-209 de 2007**, se amplió el espectro de participación de las víctimas dentro del proceso penal, permitiéndoles desde la formulación de imputación solicitar pruebas anticipadas, participar en la audiencia de formulación de imputación, solicitar la medida de aseguramiento respectiva que considere, tenerse en cuenta con plenas garantías en la aplicación del principio de oportunidad, así como en el evento de preclusión de la investigación y con plenas facultades en el traslado del escrito de acusación y en la misma audiencia, solicitar medidas de protección ante el juez de control de garantías, entre otros. Dejando claro que no puede presentar teoría del caso y la participación en el juicio oral deberá realizarse a través de la fiscalía. No se dijo nada sobre la etapa de indagación
- En la sentencia **C 516 de 2007** se reconoció la posibilidad de la víctima de ser escuchada en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía e imputado o acusado, impugnar decisiones al respecto, aceptar indemnizaciones, vocación de formular propuestas de arreglo para la indemnización de los perjuicios.
- En la sentencia **C-210 de 2007**, se declara la exequibilidad del artículo 92 del código de procedimiento penal que establece la forma, el momento y la oportunidad para solicitar medidas cautelares.
- En la sentencia **C-060 de 2008**, la Corte Constitucional analizó el contenido del artículo 101 del código de procedimiento penal en donde se consagra la suspensión y cancelación de los registros adquiridos fraudulentamente, declarando la inexequibilidad de la palabra “condenatoria” que se refería que en la sentencia condenatoria se podía efectuar la cancelación, para darle el alcance a que ello se pueda efectuar mediante cualquier otro tipo de providencia que le dé fin al proceso.
- Por último en la sentencia **C-409 de 2009**, se estudió la constitucionalidad del artículo 108 del código de procedimiento penal, en el cual se consagra la citación al asegurador al incidente de reparación integral, estableciéndose la inexequibilidad parcial de la norma, para que una vez citada la aseguradora quede vinculada a la actuación

11. ESTRATEGIA METODOLOGICA

Metodológicamente se realizará un análisis o estudio descriptivo para identificar las deficiencias legislativas en que se incurrió al desconocer la importancia del ejercicio material de los derechos de las víctimas.

12. CONCEPTO DE VÍCTIMA EN EL CONTEXTO LEGAL

La filosofía, el derecho penal, la criminología, los instrumentos internacionales para la protección y desarrollo de los derechos humanos y la victimología, proporcionan las coordenadas fundamentales para la reformulación del proceso, un proceso más humano que, a través de la consagración específica y la protección eficaz de los derechos humanos de las víctimas del delito, brinde un espacio apropiado para escuchar el clamor de las víctimas por la verdad y la justicia, especialmente en su faceta restaurativa.

Cabe entonces preguntarse si en Colombia luego de la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002 y con su implementación legislativa plasmada en la Ley 906 de 2004, nuevo Código de Procedimiento Penal, se ha logrado una verdadera apuesta por las víctimas, una reconstrucción victimológica del sistema penal, o por el contrario, no es más que una regulación legal en la que existen gran cantidad de referencias a las víctimas pero carente de contenido victimológico.

La legislación actual contempla un concepto amplio de víctimas, al definir las en el Artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, que “se entiende por víctimas, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con éste.”¹

Dicha norma en estudio de constitucionalidad, fue declarado parcialmente inexecutable mediante sentencia C-516 de 2007, en esta oportunidad la Corte Constitucional, suprimió la palabra directa, que restringía la condición de víctima a la persona que hubiese sufrido algún daño directo del injusto.

Esta modificación tiene dos pilares esenciales en los cuales se fundamenta por una parte, la implementación de un sistema acusatorio que consulte los estándares internacionales para eficacia y garantía de la persecución de los delitos y el juzgamiento de personas; y por la otra, una apuesta por la protección y atención integral a las víctimas del delito, entendiendo que sólo aportando respuestas efectivas a sus expectativas es posible hacer justicia como paso previo para alcanzar y fortalecer la paz.

Finalmente la estructuración de un concepto amplio de víctimas del delito para el proceso penal que supere la consideración limitada del derecho tradicional sirve como punto de partida para determinar hasta dónde se ha llegado en Colombia con la modificación al sistema penal en busca de un proceso penal más humano

¹ Artículo 132, ley 906 de 2004

13. CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia de la corte constitucional ha precisado que si bien la Constitución no define el concepto de víctima, el mismo hace parte de la Carta Política, en la medida en que el numeral 6º del artículo 250 establece entre las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, la de solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

De igual manera la línea jurisprudencial se ha mantenido con una interpretación que ha matizado los alcances, ejercicio y facultades de las víctimas, con el argumento de permitir su acceso al proceso penal, sin desvirtuar la estructura procesal vigente visualizado en un sistema de partes que se enfrentan en igualdad de condiciones, donde el objeto de la participación de la víctima, está encaminado a la materialización de sus derechos a obtener la verdad, la justicia y la reparación del daño causado, pero sin que ello implique deformar los cimientos sobre los cuales se edifica el sistema acusatorio.

En la sentencia C-516 de 2007, la Corte precisó que en el derecho internacional se considera víctima toda persona que ha sufrido un daño a consecuencia del delito, tal y como lo expresa el conjunto de principios y directrices básicas de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones entendiéndose por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediatas o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Siguiendo esa tendencia del derecho internacional la jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el alcance del concepto víctima, señalando que son titulares de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste. Este criterio se ha sostenido tanto en el contexto de los procesos penales de la justicia ordinaria en el ámbito nacional, como en el contexto de la justicia transicional y de la justicia internacional.

De la misma manera manifiesta esta corporación que para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto, y específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, que legitime la participación de la víctima o de los

perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso

Lo anteriormente dicho y en concordancia con el amplio concepto manejado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera como perjudicados a la víctima directa y su familia y de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que desarrolla las tesis del carácter personal del perjuicio, conforme a la cual, para demandar reparación no se exige ningún otro requisito distinto al de que el demandante haya sufrido un perjuicio². Concepto cuya sustentación jurídica se encuentra en el artículo 2341 del Código Civil que no limita la acción de responsabilidad únicamente a los parientes de la víctima, ni tampoco a la víctima directa, teniendo como sujetos del derecho de indemnización a “todo aquel a quien el delito o la culpa haya inferido daño”³

² En el caso de muerte de una persona, en fallo del 24 de junio de 1942 la Corte Suprema de Justicia enunció que tienen derecho a solicitar reparación “las personas que ya por vivir directamente del esfuerzo del muerto, ya por derivar utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, tienen el derecho, la personería, la acción para reclamar o pedir la indemnización de perjuicios, por que ellas directamente han sido perjudicadas” (C.S.J. Casación de junio 24 de 1942 , MP, Luis Escallón, G.J. T. LIII, No. 1938, p.656). Así mismo el Consejo de Estado sostuvo que “la acción para reclamar los perjuicios por muerte pertenece a quien los sufra, sin consideración alguna al parentesco o a las reglas de la sucesión” (Fallo del 21 de febrero de 1985 , Exp. 3253). Este criterio es reiterado en fallo de junio 19 de 1989, Exp. 4678 que reconoció un perjuicio ocasionado a una persona por la pérdida de un auxilio económico originado en la muerte de quien le ayudaba.

³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MP. B. AGUDELO, G.J., Casación de julio 15 de 1949, T. LXVI, No. 2073-2074, P.525.

14. CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA DOCTRINA

No hay un concepto único de víctima, dependerá siempre de la rama en la que queramos centrar nuestra investigación, la acotación de uno u otro concepto. Históricamente no se ha prestado una atención especial a la víctima, es a partir de 1950 cuando comienza a tratarse el tema de la víctima, antes de esta fecha hay alguna referencia a la víctima, pero son referencias indirectas como por ej., el caso de Ferri que trataba a la víctima solamente desde el punto de vista de la reparación del daño, o Garófalo, que únicamente aludía a la víctima cuando se refería al tema de la indemnización.

Etimológicamente víctima procede del latín y significa "persona o animal sacrificado o que se destina a sacrificio". Hoy día este concepto ha evolucionado, por ejemplo, podemos entender por víctima aquella persona que se sacrifica voluntariamente o a la que sufre por culpa de otro.

A partir de una visión amplia y alimentada desde la victimología en consonancia con Julio Andrés Sanpedro Arrubla⁴, el concepto de víctima ha tenido una evolución progresiva en procura de dar y brindar mayor cobertura y protección a los derechos que ostenta la parte que sufre o padece el hecho criminal.

Destacó así que en tiempos pretéritos, la víctima estaba reducida a la categoría abstracta de sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico protegido con la norma, quedando excluidas otras personas o grupos que por no haber padecido un daño directo con el punible, no se les considera víctimas a pesar de padecer consecuencias nocivas del hecho criminal.

El derecho penal opera con un concepto limitado de víctimas del delito, entendiendo que la víctima es el titular del bien jurídico protegido o sujeto pasivo de la infracción; a su lado se encuentran los perjudicados con el delito, es decir, aquellos que se ven directa o indirectamente afectados por el delito, pero que no son sujetos pasivos"⁵. El concepto de sujeto pasivo del delito ocupa el otro extremo de la relación delictiva. No hay que confundir, no obstante, las categorías de sujeto pasivo y de perjudicado, aunque con frecuencia ambas pueden resumirse en una misma persona. Sujeto pasivo es la persona titular del bien jurídico. Perjudicado es quien sufre económica y moralmente las consecuencias del delito"⁶.

⁴ SAN PEDRO ARRUBLA, Julio Andrés. Las víctimas del delito en los tiempos del olvido. Una reflexión desde la victimología en torno a la reforma al sistema penal en Colombia, Redalyc, (2005).

⁵ REYES CALDERON, Jose Adolfo y LEON- DELL, Rosario, Victimología, reyes, león, Guatemala (1997), 243). Citando a QUINTERO OLIVARES. G y MORALES PRATS, F. y PRATS CANUT, J.M.

⁶ ARANZANDI y NAVARRA, Manual de derecho penal, parte general, 1999, 648.

Desde la victimología se alude al sujeto pasivo, pero se supera permitiendo estimar en el mismo sentido a perjudicado directo e indirecto, con la infracción. Igualmente comprende la victimización producida por conductas que afectan a la sociedad en su conjunto, que son denominadas como “delitos sin víctimas” cuando en realidad son conductas ilícitas que aunque no tienen una víctima personificada dañan grupos o comunidades en su conjunto, cuyos autores por diversas razones, nunca serán juzgados”. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el concepto no incluye solo a las personas naturales o físicas, sino que además comprende las personas jurídicas y otros grupos que pueden ser victimizados, colectivos y asociaciones⁷.

De otro lado, se tiene como víctima a la persona que sufre una lesión por la ocurrencia de un hecho delictivo, independientemente de la relación que exista con el victimario y de la influencia que su conducta haya tenido en la producción del suceso.

Como definición doctrinal voy a reflejar aquí tan sólo las dos más significativas: 1ª MENDELSON: Identifica a la víctima con la personalidad del individuo o colectividad en la medida en que se ve afectada por las consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por factores de muy diverso origen físico, psíquico, económico, político o social, así como el propio ambiente natural o técnico. 2ª SEPÁROVIC: Identifica a la víctima como cualquier persona que, física o mentalmente, sufre como resultado de un despiadado designio incidental o accidental.

De lo anterior se desprende una constante evolución frente a la noción del concepto de víctima a nivel doctrinario, sin dejar de lado que desde diferentes ópticas y concepciones jurídicas que contribuyen a pensar en un tratamiento del delito desde una visión de justicia que enfoca su estudio en la víctima, encaminada a obtener la verdad y la reparación del daño, impidiendo que se convierta en un acto de venganza⁸.

⁷ MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, La víctima en el proceso penal, 1990, 45.

⁸ MATE REYES, En torno a una justicia anamética, 2003, 101

15. FACULTADES DE LA VÍCTIMA EN LA INDAGACIÓN

En la sentencia C-451 de 2003 a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de investigación previa. De la misma forma y en pronunciamiento más reciente con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, en sentencia C-454 de 2006 manifestó “Es evidente en consecuencia, que exista un claro interés de las víctimas y perjudicados con la conducta investigada de acceder a la indagación desde sus inicios, a efectos de contribuir positivamente al recaudo del material que dará soporte a la imputación y la acusación, eventos perfectamente compatibles con sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”

Agrega “la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar”

La víctima tiene derecho a participar desde el inicio de las primeras pesquisas y se encuentra habilitada para recaudar elementos probatorios y evidencias físicas que después puedan ser aportados a la Fiscalía o ser llevados directamente a la audiencia respectiva donde se pretendan hacer valer.

Sin embargo estudios realizados afirman que esta etapa se encuentra restringida de cierta manera para la víctima, por no se establecer una inclusión clara que le permita conocer el estado real de la indagación, no obstante la ley contempla medidas de atención y protección a fin de brindar garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad. Es decir que su participación en esta etapa se encuentra ceñida a actuar por conducto del fiscal quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección⁹.

La Fiscalía debe comunicar a la víctima sus derechos, desde el mismo momento en que esta intervenga, garantizándose una garantía a recibir información entre otros sobre las organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo, el tipo de ayuda o de servicios que puede recibir, el trámite dado a su denuncia o querella¹⁰, del mismo modo se consagra la posibilidad de solicitar medidas de protección frente a posibles hostigamientos o amenazas en contra de sus familiares, con ocasión de los hechos denunciados, así como la obligación de practicar los interrogatorios en los que deba actuar, teniendo como marco esencial el respeto por su situación personal, sus derechos y su dignidad¹¹.

⁹ Artículos 133 -134, Ley 906 de 2004.

¹⁰ Artículo 136 Ley 906 de 2004.

¹¹ Artículo 137 Ley 906 de 2004.

Es innegable que las facultades que poseen las víctimas en la indagación se encuentran restringidas de alguna forma, como la decisión de la vinculación del imputado siendo un acto exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, en el que de manera alguna tiene incidencia la víctima, pese a que a su juicio se encuentren reunidos los elementos materiales de prueba necesarios para solicitar la vinculación del indiciado que resulta ser una etapa indispensable, para que proceda la solicitud de embargo y secuestro de sus bienes, pues solo cuando ello ocurra y a partir de la acreditación sumaria de la calidad de víctimas, el juez de control de garantías decidirá si decreta o no las medidas cautelares necesarias para indemnizar los perjuicios ocasionados con el delito.

Vale la pena resaltar frente a dicha afirmación que existen algunos pronunciamientos de las Cuerpos Colegiados de nuestro país, en los que los derechos de las víctimas han sido atendidos, por ejemplo cuando la denunciante había aportado gran cantidad de información y la Fiscalía General de la Nación, había recogido varios elementos de prueba, pero no se actuó de manera diligente logrando la vinculación del indiciado a través del acto de formulación de imputación o mediante la declaración de contumacia, caso en el que si bien no se ordenó al Órgano Instructor procediera a ello, en aras de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a la administración de justicia, se le ordenó que en un término perentorio, procediera a decidir si formulaba imputación u ordenaba el archivo de las diligencias¹².

Según el reciente postulado normativo contemplado en el párrafo del Artículo 49 de la ley 1453 de 2011, que teniendo como referente entre otras garantías constitucionales, los derechos de las víctimas a obtener una rápida administración de justicia, estableció un término de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminal, para que la Fiscalía formule imputación u ordene motivadamente el archivo de la indagación; término que será de 3 años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean más de tres indiciados, y de 5 años por investigaciones de delitos que sean competencia de la justicia especializada.¹³

Aunque la Fiscalía de manera unilateral puede ordenar el archivo de las diligencias, dado que dicha decisión afecta de manera directa a las víctimas, la normatividad exige que para proceder a ello, el ente persecutor debe constatar que los hechos que investiga no permitan su caracterización como delito,

¹² SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, M.P. MORA INSUASTY, Socorro, Sentencia de tutela de segunda instancia, 18 de marzo de 2011, Radicado 08 2010 00125 01.

¹³ ARTICULO 49 PARÁGRAFO. “La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.”

teniendo la obligación de motivar tal determinación y comunicarla al denunciante y al Ministerio Público¹⁴, quienes a su vez pueden acudir ante el juez de control de garantías, para que revise la legalidad de tal decisión y obtener la reapertura de la investigación de surgir nuevos elementos de prueba.

Mediante la formulación de imputación se activan en cabeza de la víctima muchas de sus facultades dentro de dicha etapa puede acudir directamente ante el juez de garantías a fin de ser escuchada y que sus opiniones sean tenidas en cuenta dentro del proceso penal; mírese que si bien sus conceptos no son vinculantes frente a la imputación jurídica que realice la Fiscalía, podrán presentar al juez de garantías elementos de juicio que permitan discernir si la imputación jurídica se acomoda a los presupuestos fácticos que se han puesto a su conocimiento y de no ser así, dejar las constancias que resulten pertinentes, para que obren dentro de la actuación.

Igualmente, frente a la imposición de la medida de aseguramiento, es de anotar el reciente avance que constituyó la ley 1453 de 2011 “ley de convivencia ciudadana” en materia de víctimas, concediéndoles la posibilidad de acudir directamente ante el juez con funciones de control de garantías, para solicitar la imposición de medida de aseguramiento, cuando el Fiscal no lo haga, quien en todo caso debe proceder a decidir teniendo como base de su decisión, los motivos que pudo tener el Fiscal para no solicitar la imposición de la medida¹⁵.

Así mismo, en el momento en que la Fiscalía decida realizar un preacuerdo con el imputado, igualmente le asiste la obligación de escuchar previamente a la víctima, quien si bien no puede oponerse a la celebración del mismo, si puede dar su punto de vista y proponer formulas de arreglo o que se tengan en cuenta sus proposiciones en dicha negociación. Luego, su inconformidad con el acuerdo, podrá ser objeto de oposición, en la impugnación de la sentencia dictada como producto del preacuerdo.

Finalmente, la norma objeto de revisión se inscribe en un modelo de investigación distinto, en el que el esquema de indagación no se estructura sobre las etapas rígidas (preliminar y formal) que establecía el sistema anterior. En el sistema actual se establece una fase de indagación e investigación cuyo propósito es el de recaudar elementos materiales de prueba orientados a establecer la existencia de

¹⁴ Casos de tipicidad objetiva, sentencia C-1154 de 2005. MP. CEPEDA ESPINOSA, Manuel Jose.

¹⁵ Artículo 59 que modificó el Art 306 del Código de Procedimiento Penal. “*Solicitud de imposición de medida de aseguramiento*. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.

En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición. “ (Subrayado es nuestro)

la conducta punible, y los presupuestos que permitan sostener una imputación y posteriormente una acusación. Aunque en esta fase de indagación e investigación, no se practican “pruebas” en sentido formal, sí se recaudan importantes elementos materiales de prueba relacionados con el hecho y la responsabilidad del imputado o acusado, que deberán ser refrendados en la fase del juicio. Es evidente en consecuencia, que exista un claro interés de las víctimas y perjudicados con la conducta investigada de acceder a la indagación desde sus inicios, a efectos de contribuir positivamente al recaudo del material que dará soporte a la imputación y la acusación, eventos perfectamente compatibles con sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Del mismo modo, el pronunciamiento anteriormente citado, que propugna por un acceso pleno de la víctima a las diligencias, o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones, es aplicable al actual régimen de investigación en tanto que el mismo se basa en postulados como el acceso a la justicia (Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso (Art.29); la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228) y el carácter bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, que mantiene su imperio frente al nuevo modelo de procesamiento criminal.

16. FACULTADES DE LA VÍCTIMA EN EL JUICIO ORAL

La Corte Constitucional ha limitado la participación de las víctimas en esta audiencia bajo la clara consideración, que al ser el momento procesal por excelencia donde se traba la controversia, la participación de las víctimas desequilibraría el sistema de partes, lo desnaturaliza, de allí afirma la Corte, que no pueda ser constitucionalmente válido que la víctima presente una teoría del caso diferente a la de la Fiscalía, como tampoco que participe en la práctica y controversia probatoria, sin embargo el juez de conocimiento debe garantizar que el fiscal escuche y atienda las inquietudes del representante de la víctima, señalando incluso la posibilidad de suspender la audiencia para garantizar este fin.

A pesar de los límites que conlleva el desarrollo de esta audiencia, consideramos de importancia nuestra labor en pro de las víctimas, la que ajustándose a los parámetros de la Corte, debe ser de colaboración y apoyo a la Fiscalía. Es importante examinar la estrategia de la defensa para develársela al fiscal, pero además debe aportársele líneas de intervención que fortalezcan su postura y obstruyan la de la contraparte, a modo de ejemplo aportando en el interrogatorio o contra interrogatorio. Dado lo novedoso del sistema son concurrente los errores en su trámite, verbigracia cuando se yerra en el proceso de incorporación de la evidencia física real o en la construcción de las bases probatorias, momento en el cual la intervención del apoderado de las víctimas se hace esencial para señalarle al fiscal las irregularidades en las que está incurriendo.

Presentada la acusación, en la audiencia de formulación de acusación, escenario en el que se determina la calidad de víctima, el juez reconoce la representación legal en caso de que exista, o de considerarlo necesario para la representación de sus intereses, solicita a la Fiscalía realizar los trámites necesarios para que se garantice su representación, así como por solicitud de ésta, tomará las medidas necesarias para garantizar su protección: como mantener reservado el domicilio y efectuar las citaciones por intermedio de la Fiscalía y garantizar la protección para asegurar el cumplimiento de su deber de testificar¹⁶.

En la audiencia preparatoria, etapa de decreto de pruebas, el legislador no previó una participación efectiva de la víctima, vacío que fue llenado por la jurisprudencia en sentencia de constitucionalidad que incluyó a la víctima en las solicitudes probatorias, aspecto que tocaremos más adelante, a fin de destacar nuestra postura en el sentido de afirmar que su intervención dentro del proceso penal acusatorio, fue producto de la interpretación efectuada por la Corte Constitucional.

En el juicio oral, específicamente en el debate probatorio donde no se previó una participación activa de la víctima, convirtiéndose en un mero espectador que debe estar sujeto a la teoría del caso, estrategia jurídica y práctica probatoria efectuada

¹⁶ Artículo 342 ley 906 de 2004.

por la Fiscalía, cercenando de tajo el derecho a probar inherente a la tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia.

Concluido el juicio oral, se consagró paradójicamente la facultad de presentar alegatos de conclusión, cuando no ha tenido ningún tipo de intervención material o protagonismo en el debate probatorio¹⁷. Es decir, sentará su óptica jurídica sobre los temas, las pruebas, los procedimientos, la calificación jurídica, con base en lo que un tercero u otros han podido contribuir a la teoría del caso que respalda sus intereses y derechos, es decir, que simplemente podrá opinar en el sentido lato de la palabra.

Proferida la sentencia, le asiste la facultad de impugnar el fallo con el propósito de obtener la reafirmación de su interés jurídico; ejecutoriada la sentencia condenatoria, se abre el espacio para dar trámite al incidente de reparación integral, que como su nombre lo indica, abastece uno de los componentes o elementos de los derechos de la víctima, esto es, la reparación.

Para terminar, el representante de las víctimas está facultado para presentar alegatos de conclusión, allí deberá realizarse los análisis jurídicos y probatorios dirigidos a demostrar que la Fiscalía General de la Nación, siendo fiel a los compromisos probatorios adquiridos en el alegato de apertura logró probar su teoría del caso. Este es un momento estratégico donde la sustentación del representante de las víctimas debe ser coincidente con el desarrollo hecho en la audiencia por el ente fiscal. No es un momento para advertir divergencias o desacuerdos, pues esto podría generar dudas que de seguro serían potencializadas por el representante de la defensa, para solicitar un fallo acorde con sus pretensiones, verbigracia por in dubio pro reo. Finalmente de conformidad con la sentencia C-046 de 2006, existe la garantía de impugnar la sentencia absolutoria.

Concluido el juicio: derecho a reparaciones.

Contemplan audiencias en las que la participación del representante legal de las víctimas es plena, en procura no solo de la reparación material, sino de la restitución y la rehabilitación. Se establece un interrogatorio directo a testigos, peritos y acusados, sin necesidad de pasar por la fase escrita prevista para la etapa del juicio. Concluido el debate, la Corte podrá estimar a motu proprio el daño que tendrá que ser indemnizado, teniendo como única obligación suministrar la información lo más amplia posible, sobre el procedimiento de indemnización, con el fin de que el mayor número posible de víctimas esté en posición de hacer valer sus demandas. Si el número es sumamente grande, la Corte podrá estimar una indemnización colectiva más apropiada al caso concreto.

¹⁷ Artículo 443 ley 906 de 2004.

Las condenas se pueden establecer con cargo al acusado, o mediante un Fondo especial que se alimenta de multas, de los bienes confiscados o por contribuciones voluntarias.

Del anterior recuento resulta indiscutible, el papel trascendente que juegan las víctimas en el marco de la Corte Penal Internacional, pues “ya no son objetos o marionetas del proceso”, del Fiscal o de los abogados, como lo alude la autora, sino que adquirieron un papel protagónico durante el juicio, participación que sin dudas les deja una mayor tranquilidad al haber sido actores reales del juzgamiento, que les permite la rehabilitación. Dice Raul Carranca y Rivas que las víctimas “son actores en el juicio y, de cierto modo, se vuelven actores de su propio destino, de su propia reconstrucción personal. Seguramente, aquí tocamos lo más importante, ya que frente a crímenes internacionales que chocan con la conciencia humana y que según las palabras de Hannah Arendt no se puede en realidad “ni sancionar, ni perdonar”, lo más fundamental, y lo más consustancial es otorgar una nueva vida, llena de esperanzas a las víctimas. Es integrarles, de una vez por todas, en la Humanidad. Gracias al Estatuto de Roma, es decir merced al derecho, la palabra de las víctimas, su palabra, les ha sido restituida”.¹⁸

¹⁸ CARRANCA, R. y RIVAS, *El derecho y la palabra*, México, (1998)

17. JUSTIFICACIONES CONSTITUCIONALES PARA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

Aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa al considerar que el nuevo sistema procesal en manera alguna puede limitar los derechos de la víctima a reparación, verdad y justicia, es lo cierto que ha terminado concluyendo que por virtud del carácter adversarial del nuevo procedimiento, los derechos de las víctimas sí encuentran claras limitaciones, particularmente en la etapa del juicio, por cuanto de permitirse una participación activa de ellas en el debate probatorio se resentiría gravemente el principio de igualdad de armas, el cual implica, en esencia, que debe existir una parte que acusa y otra que se defiende de la acusación.

Esta limitación, que en la práctica comporta un desconocimiento u olvido de lo que ha sido la evolución de los derechos de las víctimas, resulta coherente, mas no justificada, por las regulaciones de la Ley 906 de 2004 en cuanto al contenido de la sentencia, pues lo que se establece en el nuevo código es que el fallo solamente puede ocuparse de la responsabilidad penal de los autores o partícipes, sin que allí pueda emitirse pronunciamiento alguno en torno a la responsabilidad civil de quienes de conformidad con la ley sustancial están llamados a reparar el daño.

Sin embargo, el legislador de 2004, para enmascarar lo que en realidad terminó regulando, que no fue otra cosa que un replanteamiento y limitación de los derechos de las víctimas, expidió más de una centena de disposiciones donde ostentosamente se anuncia toda suerte de mecanismos de ejercicio y protección de los derechos de las víctimas, los cuales en realidad no pueden concretarse en efectivas posibilidades de realización de los derechos a reparación, verdad y justicia.

No creemos que sea esta una afirmación temeraria, pues basta considerar que la víctima no puede dentro del juicio oral desplegar ninguna actividad probatoria que contribuya a demostrar la responsabilidad penal del acusado, como tampoco puede hacerlo en procura de establecer la responsabilidad civil; en realidad, su participación queda relegada a una actuación posterior: el incidente de reparación integral, que tiene como presupuesto o requisito sine qua non el que se haya emitido un fallo y que éste sea condenatorio y declarativo de responsabilidad penal.

Del mismo modo, ha sostenido uniforme y reiteradamente en sus pronunciamientos donde el tema abordado ha sido el derecho de las víctimas dentro del proceso penal, que su intervención puede ser limitada o restringida en ciertas etapas procesales con base a las siguientes razones:

En primer lugar, porque el Constituyente diseñó un modelo enfatizado en el carácter adversarial de confrontación entre la Fiscalía y la defensa durante la etapa del juicio, con lo cual limitó desde el propio texto constitucional, la facultad de intervención directa de otros intervinientes como el Ministerio Público o la propia víctima.

Esta justificación referente al modelo de carácter adversarial es rebatible, con los mismos juicios efectuados por el alto Tribunal Constitucional cuando señala que Colombia adoptó un sistema acusatorio pero con características propias que emanan del ordenamiento pre existente, esto es, fundado en los principios, valores y derechos consagrados en la Carta Política, luego, es inadmisibile que bajo ese presupuesto se mutile el derecho a la igualdad, el acceso a la justicia y el derecho a participar en las decisiones que los afectan, cuando un ciudadano es quien tiene que soportar el lastre y consecuencias del hecho punible.

Ahora, uno de los pilares fundamentales discutidos de manera previa, concomitante y posterior a la expedición del acto legislativo, fue permitirle una mayor maniobra a la víctima en el proceso penal, tanto así que el mismo legislador consagró como principio rector sus derechos fundamentales en el Artículo 11 de la ley 906 de 2004, en consecuencia, bajo la premisa de mantener el esquema resultan argumentos más fuertes que posibilitan su intervención plena en el proceso penal, sin distinción de los estados procesales.

En segundo lugar, porque sin desconocer la relevancia que la víctima tiene en el proceso penal, lo cierto es que la Constitución no le otorgó la calidad de “parte” sino de interviniente especial, de manera que no tiene las mismas facultades del procesado, ni de la Fiscalía, aún cuando le asisten amplias facultades para asegurar la protección efectiva de sus derechos que no pueden ser desconocidos cuando se fijan las reglas de procedimiento.

En contraste, resulta paradójico que se presente de manera benevolente, distorsionando la implicación que tiene en la confrontación jurídica que por el hecho de que el constituyente no le asignó de manera taxativa la calidad de parte, se le restrinja sus derechos con el denominativo de ser un simple interviniente especial. Además, del texto literal estipulado en la Constitución Política, cuando se refiere a las víctimas, lo hace de manera genérica, pero en ningún momento está señalando que sean intervinientes, pues ese apelativo se lo asignó la Corte en la sentencia C 209 de 2007.

A nuestro criterio, la Corte incurre en una falacia de sustentación argumentativa, toda vez que para justificar la restricción de los derechos de la víctima la denomina interviniente especial, para indicar posteriormente que como no es parte, no tiene las mismas facultades del procesado, ni de la Fiscalía, pero sin embargo cuenta con amplias potestades para asegurar la protección efectiva de sus derechos, circunstancia que se refuta por cuanto sino tiene las mismas calidades de los

demás sujetos procesales, nunca podrá afirmarse que goza de facultades suficientes para defender sus derechos en el proceso penal.

En tercer lugar, porque el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó expresamente a la Fiscalía la función de velar por la protección de la comunidad, de los intervinientes y de las víctimas¹⁹. En consecuencia, debe cumplir su labor tomando en consideración esos intereses en todas y cada una de las instancias, con especial rigor durante el juicio, donde la Fiscalía representa la principal vía de comunicación de la víctima.

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha destacado que en el juicio oral, “dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”²⁰.

Según la tercera tesis, aunque se acepta que la Fiscalía tiene el ejercicio de la acción penal y en ese orden proteger a la comunidad, a los intervinientes y a las víctimas, cuando se argumenta que en el juicio el ente acusador representa la principal vía de comunicación de la víctima, se olvida que en la práctica, ésta última es vista como una carga que obstruye la investigación y no siempre su actuar es coincidente, es decir, no se comparte la misma posición jurídica en cuanto al restablecimiento de sus derechos y pretensiones, siendo determinante que a fin de evitar este tipo de confrontación e inconvenientes que conllevan a que las víctimas, se sientan relegadas dentro del proceso penal, se les permita una participación independiente, con la posibilidad de actuar en igualdad de condiciones, en todas las etapas del mismo.

La función del juez constitucional consiste en examinar si la regulación adoptada por el Legislador es garante de los derechos de las víctimas y si existen instrumentos para asegurar su protección efectiva, de manera que cuando se cumplen esos presupuestos aún cuando no se contemple su participación directa en todas las etapas del proceso, habrá de respetar el diseño normativo del Legislador²¹.

Como vemos aunque son aceptables los argumentos expuestos por la Corte Constitucional, desde todo punto de vista resultan discutibles a la luz de la

¹⁹ Constitución Política, Artículo 250.- “(...) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. (...) // 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.

²⁰ CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel Jose, Sentencia C-209 de 2007.

²¹ Constitución Política, Artículo 250.- “(...) 7.- Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.

naturaleza, finalidades y exposición de motivos fijados por el constituyente derivado mediante el acto legislativo 03 de 2002, que reformó la cláusula constitucional contenida en el Artículo 250²².

Así las cosas, es apenas evidente que si el fallo es absolutorio, la víctima no tiene posibilidad real de hacer valer sus derechos a reparación, verdad y justicia. Se dirá seguramente que es el trámite incidental el momento oportuno para que la víctima haga valer sus derechos. En verdad, la regulación legal para este trámite genera más inquietudes y preguntas que respuestas y soluciones acerca de la forma en que allí puede ventilarse todo el tema de la responsabilidad civil, tema que en manera alguna y por las limitaciones expuestas ha podido ser objeto de debate y demostración dentro de la etapa del juicio oral. Y si es así, la posible afectación del derecho de defensa de quien está llamado a responder civilmente es aspecto que merece especial atención.

Finalmente, no resulta admisible que se excluya a la víctima de la facultad mínima de realizar preguntas complementarias a los testigos, como sí lo pueden hacer el juez y el Ministerio Público en desarrollo del juicio oral, en virtud a que resulta una discriminación ostensiblemente odiosa, desproporcionada e irrazonable, siendo que la víctima de manera general, es quien puede dar mayor lucidez y claridad sobre los hechos sucedidos y que son objeto de investigación, permitiendo que se interrogue sobre puntos neurálgicos, específicos y de vital interés para el proceso, que necesariamente deben ser debatidos ante el Juez de Conocimiento.

²² CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. PALACIO PALACIO, Jorge Iván, Sentencia C-260 de 2011.

18.DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA

Teniendo en cuenta el modelo de Estado imperante o establecido a partir de la Constitución de 1991, observamos que el panorama de la víctima dentro del proceso penal, obtuvo un cambio sustancial, ya que los principios fundantes del Estado Social y Democrático de Derecho consagrados en el Artículo 1º, así como la concepción antropocéntrica del mismo, dejan al descubierto que a quien se le afecta sus bienes jurídicos, no se le puede concebir como objetos de prueba o del proceso, sino como sujeto central para edificar el proceso penal y ejercer de manera legítima y respetuosa la acción penal por parte de las instituciones represoras que el sistema jurídico designe.

En el inciso segundo de la misma norma en comento, se indica que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, postulado que bajo ningún presupuesto puede ser obviado por el régimen jurídico político del Estado y que se hace extensivo a la visión constitucional del *Ius Puniendi*, en donde la víctima debe ser mirada con respeto y dignificada para impedir que se cause una victimización secundaria, lamentable tradición jurídica en pretéritos ordenamientos procesales.

Ahora, la gama de derechos estipulados como fundamentales reflejan que el Estado Colombiano adoptó un contrato social en donde el centro de toda relación jurídica es el ser humano, luego, ello debe hacer posible la humanización del ejercicio de la acción penal encaminado no solo al acusado, sino también a la víctima, logrando mantener el principio de igualdad que es consustancial al debido proceso y otros derechos implícitamente relacionados.

El artículo 228 por su parte establece los principios de la administración de justicia y entre ellos, la prevalencia del derecho sustancial y que en concordancia con el artículo 229 en donde se estipula el acceso del ciudadano a la administración de justicia, se logra colegir que los derechos de las víctimas son y deben ser tratados como derechos de carácter fundamental y en ese orden de ideas no pueden ser objeto de matices, restricciones o limitaciones, sino que en los términos del artículo 85 deben ser de aplicación inmediata por tener preponderancia y primacía dentro de la Constitución.

El acceso a la administración de justicia al ostentar una significación múltiple y compleja ha sido manejado y concebido de la siguiente forma por la jurisprudencia nacional: “Por una parte, constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y contribuye a la realización material de los fines esenciales e inmediatos

del Estado. En otro sentido, se configura como un derecho fundamental de aplicación inmediata²³, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

Por otro lado, es incuestionable que Colombia ha suscrito y ratificado importantes convenios y tratados internacionales entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en los cuales se consagra la posibilidad para que las personas pertenecientes a los Estados partes, tengan una tutela judicial efectiva.

Como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2011, en el ámbito internacional, también ha existido una marcada preocupación para proteger a las víctimas en el marco de violaciones de derechos humanos, así como en el ámbito de delitos comunes, de tal suerte que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en el informe final sobre la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en 1991, así como el Conjunto de Principios contra la Impunidad actualizado en el año 2005, entiende el derecho a la verdad, desde dos aspectos: uno relacionado con el derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, y de otro lado, el derecho a saber como un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro sus violaciones, imponiendo a los Estados el deber de recordar, es decir para lograr el ideal de no repetición.

Debido a la preocupación por los elevados índices de impunidad que caracterizan las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años en el ámbito internacional se han venido configurando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En el ámbito americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las obligaciones de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, al igual que aquélla de reparar integralmente a las víctimas de tales actos emanan directamente del artículo 1.1. Del tratado internacional, es decir, de la obligación de carácter general que asumieron los Estados de garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Dado el carácter abstracto que presentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ha sido necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que algunos relatores de la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, precisen los contenidos y alcances de estos derechos fundamentales. De igual manera, cabe señalar que estos tres derechos conducen hacia un mismo fin: combatir la impunidad.

²³ CORTE CONSTITUCIONAL, Cfr., entre otras, las sentencias T-006/92, C-059/93, T-538/94, C-037/96, C-215/99 y C-1195/2001.

Derecho a conocer la verdad, presenta una doble dimensión: como derecho colectivo y como derecho individual. Como derecho colectivo, consiste en el derecho que le asiste a cada pueblo a conocer su historia, saber la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos, las circunstancias y los motivos que llevaron a la comisión de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este derecho implica que se preserve del olvido la memoria colectiva.

El derecho a la verdad, como derecho colectivo, requiere de algunas garantías que aseguren su ejercicio, las cuales consisten en la creación de comisiones extrajudiciales de investigación y la conservación y consulta de los archivos correspondientes. En tal sentido, se deben tomar medidas cautelares para impedir la destrucción, adulteración o falsificación de los archivos en que se recogen las violaciones cometidas, y no podrán invocarse confidencialidad o razones de defensa nacional para evitar su consulta por instancias judiciales o las víctimas.

De igual manera, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.

Derecho a la justicia, consiste en la facultad que tiene la colectividad o directamente la víctima para hacer valer sus derechos mediante acciones judiciales, administrativas que ofrezca el derecho interno o internacional en vigor. Conlleva además los siguientes efectos prácticos: (I) la imprescriptibilidad de las acciones penales en materia de violaciones a las normas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario; (II) restricciones severas a la práctica de las amnistías; (III) limitaciones al derecho de asilo; (IV) restricciones a las competencias de los tribunales militares y (V) principio de inamovilidad de los jueces.

Derecho a ser reparado, En el orden internacional, el derecho que tienen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos a ser reparadas presenta una dimensión individual y otra colectiva. La primera comprenderá el derecho a la restitución, la indemnización y la rehabilitación; la segunda, abarca las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

La restitución consiste en lograr que la víctima vuelva a la situación en la que se encontraba con antelación a los hechos, es decir, la clásica restitución *integrum*. Por su naturaleza abarca medidas como permitir el ejercicio de libertades individuales, recobrar la nacionalidad o la ciudadanía, el restablecimiento de la vida familiar, el regreso a su país y la recuperación de su empleo y propiedad.

La indemnización, consiste en una cantidad financiera evaluable de todos los perjuicios sufridos, en particular, los daños materiales y morales, incluyendo la pérdida de oportunidades.

En cuanto a las medidas de rehabilitación, éstas comprenden la financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica que requieran las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En los casos de desapariciones forzadas, el Estado deberá hacer todas las diligencias posibles para que el cadáver sea encontrado, plenamente identificado y finalmente entregado a los familiares.

Dentro de las modalidades colectivas de reparación del daño encontramos, en primer lugar, las medidas de satisfacción. Se trata de ciertos actos encaminados a reparar moralmente la memoria de las víctimas y a recordar lo sucedido. Entre ellas encontramos las siguientes: el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad; las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas y actos conmemorativos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, concibe el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta como un medio de reparación, y que dicha expectativa debe ser satisfecha por el Estado investigando lo sucedido, adelantando un proceso contra los presuntos responsables de los ilícitos e imponiendo las consecuencias sancionatorias pertinentes²⁴.

En relación con el derecho a la justicia, se estima como el derecho al acceso a los recursos judiciales efectivos y adecuados que permitan la realización de las investigaciones, el desarrollo imparcial, serio y diligente de las mismas, la persecución, aprehensión, enjuiciamiento y sanción de los agresores; ligado a ello, se conmina a los Estados a brindar los mecanismos necesarios para facilitar la participación de las víctimas dentro de la investigación, permitiendo que a través de estos, logren el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos, garantías que incluyen el derecho a contar con amplias oportunidades para intervenir, ser escuchados tanto en el esclarecimiento de los hechos, como en la sanción de los responsables a fin de obtener una reparación justa²⁵.

Se puede concluir, que las víctimas gozan de un amplio espectro de protección a nivel interno y en el contexto internacional, de tal forma que la naturaleza de los mismos son esenciales o fundamentales para lograr el cometido de una debida justicia en un sistema democrático como el acogido en Colombia, de allí que no es

²⁴ CIDH, RINCON, Tatiana, Verdad Justicia y Reparación, P. 58-60.

²⁵ NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación general No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el pacto, 29 de marzo de 2004, Parr. 18, RINCON, Tatiana, Verdad, Justicia y Reparación. P. 62

posible bajo ningún argumento impedir el goce efectivo, inmediato y material de sus derechos en desarrollo de una investigación de carácter penal.

19. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN OTRAS ETAPAS PROCESALES Y DE CARA A LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Como hemos venido ilustrando, los derechos de las víctimas en el proceso penal se han fortalecido, gracias a la intervención en su mayoría de veces acertada por parte del Tribunal Constitucional, pero que se ha centrado de forma cardinal en la etapa de investigación, es decir, una vez efectuada la imputación y hasta antes de iniciarse el juicio oral, dejando de lado el ejercicio pleno de los derechos en la indagación y juicio.

Resulta francamente irónico que una vez terminado el juicio oral, se permita a la víctima presentar alegatos de conclusión, cuando se le impidió participar en la práctica de pruebas, cercenando su derecho a probar que también le asiste.

Es de resaltar que conforme a los pronunciamientos antes enunciados, es posible construir una línea jurisprudencial que puede contribuir al análisis, comprensión y asimilación de la evolución e involución de los derechos de las víctimas en el proceso penal colombiano. Es posible extraer los numerosos pronunciamientos referidos a la participación de las víctimas en el proceso penal. Entre 1995 y 2011 la Corte Constitucional discutió el tema en más de treinta oportunidades variando significativamente su doctrina a lo largo del período, lo que podría explicarse a partir del auge de la victimología, el cambio de sistema penal (de tendencia inquisitiva a tendencia acusatoria), la influencia de la jurisprudencia internacional en materia de víctimas de violaciones de derechos humanos, y el proceso interno de justicia transicional, entre otros factores.

La participación de las víctimas dentro del proceso penal es de gran importancia, no sólo porque de su determinación se desprende la seguridad jurídica del proceso, sino porque de ello dependen las expectativas de las víctimas y los imputados en el proceso penal. Si entendemos el proceso penal como el mecanismo institucional que permite resarcir los efectos del conflicto social, lo que está en juego son las expectativas de los asociados dentro del contrato social mismo. De ello se desprende además, el balance que se haga como sociedad entre los derechos de unos al debido proceso y de los otros a la justicia, la verdad y la reparación.

La pregunta cuándo y con qué fin puede participar una víctima dentro del proceso penal ha generado al menos tres tesis en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La primera, vigente básicamente entre 1991 y 2002, limita los derechos de las víctimas a la calidad de parte civil dentro del proceso penal, cuyo único interés legítimo es la indemnización económica del daño material y moral causado por la comisión del delito, lo que implica que la participación de la víctima en el proceso penal sea particularmente reducida. Esta tesis se entiende en el marco de vigencia

de un Código Penal de corte inquisitivo²⁶ y una Corte Constitucional aún relativamente ajena a los influjos de la jurisprudencia internacional en materia de violaciones a los derechos humanos.

La segunda, diametralmente opuesta a la primera, reconoce de manera general los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, vigente entre 2002 y 2007, en ella se amplía la participación de las víctimas a lo largo de las distintas etapas del proceso penal, como mecanismo para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Esta tesis se vio influenciada de manera directa por decisiones judiciales internacionales en materia de violación de derechos humanos, a partir de las cuales la Corte Constitucional los aplicó a procesos penales de víctimas de delitos ordinarios. Lo anterior se vio complementado por la revisión de casos nacionales relacionados con la participación de víctimas en procesos ante la justicia penal militar, en procesos por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, e incluso en procesos de justicia transicional. Es de resaltar que esta posición surge además en una etapa de transición, pues entre 2002 y 2005 se encontraba en vigencia un proceso penal de corte mixto²⁷, y luego entre 2005 y 2007 entra en vigencia un sistema penal acusatorio²⁸.

La tercera tesis, vigente desde 2007 hasta la fecha, surge de la re-interpretación de la segunda tesis a partir de la implementación del sistema penal acusatorio. Si bien la Corte Constitucional reitera que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, advierte que estos derechos no son absolutos y por esa razón los pondera con los derechos de la defensa, que supone la igualdad de armas entre las partes del proceso.

De las tesis expuestas, resulta claro que es la Corte Constitucional la que ha venido reivindicando los derechos de las víctimas a través de una interpretación armónica con los postulados constitucionales; ejemplo de ello son los pronunciamientos que en los últimos años ha tenido el máximo Tribunal Constitucional, que dada su trascendencia consideramos de vital importancia resaltar, para un mejor entendimiento de este artículo.

La sentencia **C-228 de 2002**²⁹ profundizó en la reconceptualización de la parte civil dentro del proceso penal ordinario a partir de la Constitución de 1991, realizando un completo estudio de los derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito, señalando que éstos tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria, como es la forma tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un hecho delictivo, desarrollando en consecuencia los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios constitucionales y del derecho internacional de los

²⁶ Decreto Ley 2700 de 1991

²⁷ Ley 600 de 2000

²⁸ Ley 906 de 2004.

²⁹ M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel Jose y MONTEALEGRE LYNET, Eduardo, 3 de abril de 2002.

derechos humanos, particularmente del derecho a la tutela judicial efectiva; se apoya igualmente en una referencia al derecho comparado. En esta decisión se declara la exequibilidad del inciso 1° del artículo 137 de la Ley 600 de 2002, al precisar que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia y por ende a la posibilidad real de participar en las etapas preliminares de la investigación penal.

En la sentencia **C-578 de 2002**³⁰, se destacan la efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad, como razones políticas para declarar la exequibilidad de la Ley revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se crea el Estatuto de La Corte Penal Internacional”

En la sentencia **T- 556 de 2002**³¹, la Corte reiteró la doctrina de los derechos de las víctimas en el proceso, con énfasis en la posibilidad de acceso a la justicia y la protección de este derecho por vía de tutela cuando resulte vulnerado o amenazado.

En la sentencia **C-451 de 2003**³², a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de investigación previa.

En la sentencia **C- 570 de 2003**³³, la Corte realizó un estudio sobre las especiales ventajas que se derivan de la constitución de parte civil dentro del proceso penal, en contraste con la reclamación mediante la acción ordinaria ante la jurisdicción civil; prerrogativas que se derivan de derecho de las víctimas a saber la verdad, a que se haga justicia y a la reparación integral.

La sentencia **C-775 de 2003**³⁴, estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 600 de 2000 sobre restablecimiento del derecho, reiterando la doctrina sobre la trilogía de derechos de que son titulares las víctimas, esto es verdad, justicia y reparación; esta providencia destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad que persiga un orden justo, y la interdependencia que existe entre ellos, de manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”.

³⁰ M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, 30 de julio de 2002.

³¹ M.P. CÓRDOBA TRVIÑO, Jaime, 19 de julio de 2002.

³² M.P. MONTEALEGRE LYNET, Eduardo, 3 de junio de 2003.

³³ M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo, 15 de julio de 2003.

³⁴ M.P. ARAUJO RENTERIA, Jaime, 9 de septiembre de 2003.

En las sentencias **C-014 de 2004**³⁵ y **T-114 de 2004**³⁶, la Corte hizo extensivo el concepto de víctima y el alcance constitucional de sus derechos a los afectados por las faltas disciplinarias.

En la sentencias **C-1154 de 2005**³⁷ y **C- 1177 de 2005**³⁸, la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la ley 906 de 2004, sobre archivo de diligencias³⁹ e inadmisión de denuncia⁴⁰, condicionando su constitucionalidad a que tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y al denunciante respectivamente, a fin de preservar sus derechos.

En la sentencia **C-591 de 2005**⁴¹, se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 906 de 2004, destacándose la relevancia de los derechos de las víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado mediante el acto legislativo 03 de 2002.

En la sentencia **C-979 de 2005**⁴² a propósito de la demanda contra los artículos 78, 192.4, 327, 330 y 527 de la Ley 906 de 2004, la Corte realizó un pronunciamiento sobre la protección de las víctimas y los esquemas de justicia distributiva establecidos en el sistema procesal de tendencia acusatoria.

En la sentencia **C-047 de 2006**⁴³, se estudió la constitucionalidad de los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la Ley 906 de 2004; en esta providencia la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre el derecho al non bis in ídem y el debido proceso contenido en la sentencia C-04 de 2003⁴⁴ y C-979 de 2005⁴⁵, señalando que “en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas, desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem.”

Como quiera que la Ley 906 de 2004, omitió incluir a las víctimas como sujetos o intervinientes con posibilidad de solicitar pruebas en igualdad de condiciones que la defensa, la fiscalía y el ministerio público, en la sentencia **C-454 de 2006**⁴⁶ la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 357 del

³⁵ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 20 de enero de 2004.

³⁶ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 12 de febrero de 2004.

³⁷ M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, 15 de noviembre de 2004.

³⁸ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 17 de noviembre de 2005

³⁹ ARTÍCULO 79 ley 906 de 2004.

⁴⁰ ARTÍCULO 69 ley 906 de 2004.

⁴¹ M.P. VARGAS HERNANDEZ, Clara Ines, 9 de junio de 2005.

⁴² M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 26 de septiembre de 2004.

⁴³ M.P. ESCOBAR GIL, Rodrigo, 1 de febrero de 2006.

⁴⁴ M.P. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, 20 de enero de 2003

⁴⁵ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 26 de septiembre de 2005.

⁴⁶ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 7 de junio de 2006.

Código de Procedimiento Penal, en el entendido que la víctima también puede realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria.

En la sentencia **C-209 de 2007**⁴⁷, que dentro del sistema penal acusatorio puede considerarse la más completa, se amplió el espectro de participación de las víctimas dentro del proceso penal, permitiendo participar desde la formulación de imputación, solicitar pruebas anticipadas, solicitar medida de aseguramiento, así como ser considerada con plenas garantías en la aplicación del principio de oportunidad, en el evento de preclusión de la investigación y con plenas facultades en el traslado del escrito de acusación, y en la misma audiencia, solicitar medidas de protección ante el juez de control de garantías, entre otros; en esta sentencia se deja claro que no puede presentar la teoría del caso y su participación en el juicio oral se hace a través de la fiscalía. Igualmente el Tribunal Constitucional encuentra constitucional las limitaciones o restricciones que tiene la víctima para participar en la práctica de pruebas en desarrollo del juicio oral, encontrando constitucional con el argumento de la estructura básica del sistema acusatorio y la igualdad de armas dentro de una concepción adversarial.

En la sentencia **C 516 de 2007**⁴⁸ se reconoció la posibilidad de la víctima de ser escuchada en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía e imputado o acusado, impugnar decisiones al respecto, aceptar indemnizaciones, así como la vocación de formular propuestas de arreglo para la indemnización de los perjuicios.

En la sentencia **C-210 de 2007**⁴⁹, se declara la exequibilidad del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal que establece la forma, el momento y la oportunidad para solicitar medidas cautelares.

En la sentencia **C-060 de 2008**⁵⁰, la Corte Constitucional analizó el contenido del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal que consagra la suspensión y cancelación de los registros adquiridos fraudulentamente, declarando la inexequibilidad de la palabra “condenatoria” que hacía referencia a que solo con el fallo de condena se podía efectuar la cancelación de dichos registros, para darle el alcance a que ello se pueda efectuar mediante cualquier otro tipo de providencia que le dé fin al proceso.

En la sentencia **C-409 de 2009**⁵¹, se estudió la constitucionalidad del artículo 108 del código de procedimiento penal, respecto a la citación del asegurador al

⁴⁷ M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, 21 de marzo de 2007.

⁴⁸ M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, 11 de julio de 2007.

⁴⁹ M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo, 21 de marzo de 2007.

⁵⁰ M.P. PINILLA PINILLA, Nilson, 30 de enero de 2008.

⁵¹ M.P. HENAO PEREZ, Juan Carlos, 17 de junio de 2009.

incidente de reparación integral, estableciéndose la inexequibilidad parcial de la norma, para que una vez citada la aseguradora quede vinculada a la actuación.

En la sentencia **C-250 de 2011**⁵², se estableció la posibilidad de participación de la víctima en la audiencia de individualización de pena y sentencia, regulada en el Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, con el fin que estas se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable y lo consideran conveniente, referirse a la probable determinación de pena aplicable y a la concesión de algún subrogado.

En la sentencia **C-260 de 2011**⁵³, se revisó la constitucionalidad del Artículo 397 del Código de Procedimiento Penal referente a la posibilidad de realizar preguntas complementarias en el juicio oral, en igualdad de condiciones que se encuentra facultado el juez y el Ministerio Público; sin embargo, después de un extenso análisis y amplia argumentación se le niega esta posibilidad denotando la Corte un claro paternalismo jurídico o posición proteccionista invalidante. Respecto a la participación de la víctima en otras procesales tenemos.

La fase de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, ofrece un gran reto para los representantes de víctimas, en primer lugar por la necesidad de contar con investigadores que aporten en la proyección de las pesquisas investigativas, pero además, la necesidad de contar con expertos en diferentes ciencias como: antropólogos, balísticos, explosivistas, médicos legistas, topógrafos, entre otros, siendo esto una exigencia para los representantes de las víctimas pues, contar con estos expertos conlleva el pago de altas sumas de dinero por sus honorarios, las cuales en la mayoría de los casos no tendrán forma de sufragar.

Ahora, infortunadamente por la omisión legislativa que advertimos al inicio de este escrito, en el sentido de no haberse otorgado mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos de participación de las víctimas, no existe una norma que de manera clara reglamente cómo puede la víctima solicitar los servicios de los expertos de medicina legal, o cómo puede adelantar otras labores de indagación como solicitar a entidades públicas o privadas información, o entrevistar a agentes de policía judicial entre otras

Se entiende entonces que con la constancia que acredite la calidad que ostentamos, podremos tener una representación ante diferentes funcionarios y autoridades públicas para lograr su colaboración en nuestras pesquisas investigativas. Ahora, estas labores deben ser asumidas con sumo cuidado, pues muchas de ellas pueden vulnerar derechos fundamentales del procesado o de terceras personas. Para ejemplificarlo de manera sencilla, pensemos en el evento

⁵² M.P. GONZALEZ CUERVO, Mauricio, 6 de abril de 2011.

⁵³ M.P. PALACIO PALACIO, Jorge Ivan, 6 de abril de 2011

de solicitar a una entidad bancaria que nos suministre el reporte de los movimientos financieros realizados en la cuenta del procesado; o solicitarle a una empresa privada prestadora del servicio de telefonía celular que nos expida el Link de las llamadas entrantes y salientes al celular del procesado.

Pues bien, para el adelantamiento de estas labores investigativas tanto los representantes de las víctimas como los de la defensa, estamos sometidos a las mismas normas que regulan las técnicas de indagación e investigación de la prueba, desarrolladas por el legislador a partir del artículo 200 de la Ley 906 de 2004, y tendremos que prestarle especial atención al desarrollo de las actuaciones investigativas reguladas a partir del artículo 213 de la ley.

Lo anterior nos significa, que si vamos a realizar labores investigativas que NO afecten derechos fundamentales de terceros, podremos adelantarlas sin necesidad de autorización previa, pero si por el contrario, se trata de pesquisas que puedan vulnerar derechos como la intimidad, será forzoso acudir ante el juez de control de garantías a realizar, ya sea audiencia preliminar o posterior dependiendo del grado de injerencia en las garantías fundamentales.

De esta manera, y para ejemplificar nuestra posición, si lo que se pretende es solicitar a una entidad bancaria que nos entregue el reporte de los movimientos financieros de los procesados, como en este evento nos encontramos ante una actuación que vulnera la intimidad, necesitaremos además de la constancia que acredite nuestra calidad, realizar una audiencia preliminar solicitándole al juez de Control de Garantías autorización para su realización.

Sin embargo, si lo que pretendemos es solicitarle al Batallón La Popa del Ejército Nacional que nos expida la Orden de Batalla del operativo que arrojó como resultado unos hechos ilícitos, la pregunta obligada será: ¿esta información vulnera derechos fundamentales como la Intimidad? La respuesta tendrá que ser negativa, siendo así, no será necesario solicitar autorización al juez de control de garantías y la entidad oficial tendrá la obligación de entregar la información solicitada, sin poder oponerse la reserva legal.

El Archivo de las Diligencias, como lo ha sentenciado la Corte, la Fiscalía General de la Nación podrá archivar la investigación sin necesidad de autorización judicial, al considerar que no se logro recolectar evidencia que permitiera clarificar si se está en presencia de un delito o la identidad del presunto responsable. En sentencia C-1154 de 2005 con magistrado ponente el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional expresó que tal determinación además de ser motivada, debe ser informada a la víctima y la persona denunciante. “La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad. Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser

motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”. Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.

Audiencias Preliminares, la Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007 al analizar la participación de la víctima a la luz de los postulados del sistema acusatorio, validó su participación en las audiencias preliminares, bajo la clara concepción que ello no desequilibra el sistema de partes, ni la igualdad de armas.

Es así, como será posible acudir a la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y/o solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La participación de la víctima a través de su representante judicial se torna importante, bajo el entendido que puede ocurrir que la postura de la Fiscalía no sea compartida por la víctima, incluso podría reñir con sus intereses.

Audiencia de Formulación de imputación, A pesar de que el artículo 289 del estatuto procesal, no contempla la intervención de la víctima en esta audiencia, la Corte Constitucional ha interpretado esta figura jurídica a la luz de sus derechos y la doctrina internacional, para considerar que le asiste el derecho de participar. Ha sido ardua la discusión que se ha presentado en torno al sentido y alcance de este acto preprocesal, hasta llegar al entendimiento que se trata de un simple acto de comunicación mediante el cual la Fiscalía General de la Nación informa al indiciado los hechos jurídicamente relevantes por los cuales va ser objeto de investigación.

Audiencia de Solicitud de Imposición de Medida de Aseguramiento, Igualmente se considera que la participación más efectiva será aquella que logre concitar la voluntad de la Fiscalía y la víctima, por ello será oportuno expresar previamente nuestros intereses y pretensiones. Ahora, si no se logra que la postura fiscal sea coherente con las pretensiones de las víctimas, se tendrá el derecho de hacer uso de la palabra para hacer nuestra postulación.

Preacuerdo y Negociaciones, El mismo enunciado del título II de la nueva codificación adjetiva, nos advierte que el legislador no contempló la participación

de las víctimas en los preacuerdos y negociaciones que pueden ser objeto de desarrollo por la Fiscalía y la defensa.

El artículo 350 al desarrollar el mecanismo, establece que: "... Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a preacuerdos". De esta manera el legislador denegó la posibilidad que la voz de las víctimas fuera escuchada en temas tan trascendentales como la responsabilidad penal.

La eliminación de una causal de atenuación o de un cargo específico, o el cambio en la tipificación de la conducta; a cambio de la aceptación de responsabilidad penal, interviene de manera frontal con los derechos de las víctimas. ¿Dónde queda la verdad, la justicia y la reparación si a cambio de dinamizar el sistema, de hacerlo más eficiente o como dice el legislador, hacerlo más humano, deciden celebrar un preacuerdo que termina con la investigación penal? Hacerlo así es una afrenta contra los derechos de las víctimas. Ha sido la Corte Constitucional la que nuevamente le ha correspondido señalar la exequibilidad condicionada de tal negación, para advertir que en dicha negociación le asiste el derecho a la víctima de participar, e incluso de oponerse a los términos del acuerdo. En sentencia C-516 del año 2007, el máximo tribunal expresó: "La intervención de la víctima en esta etapa resulta de particular trascendencia para controlar el ejercicio de una facultad que envuelve un amplio poder discrecional para el fiscal, sin que con ello se afecte su autonomía ni el ejercicio de las funciones que le son propias. Resulta manifiesto que la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la víctima y significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en la protección de los derechos de la víctima, y por ello se torna inconstitucional".

Finalmente, si la víctima no es convocada a participar en el preacuerdo, una vez celebrado, se le debe informar con el fin que prepare sus valoraciones a ser presentadas ante el juez de Conocimiento una vez se convoque a audiencia para impartirle aprobación.

Audiencia de Formulación de Acusación, Corresponde a la Fiscalía la presentación del escrito de formulación de acusación, del cual deberán dar traslado a la defensa, al representante de las víctimas y al Ministerio Público. El artículo 337, establecía que la presentación de este escrito a las partes e intervinientes era sólo con fines de información, sin embargo, a buena hora, nuestro Tribunal Constitucional reconoció en sentencia C-209 de 2007 que el texto legal violaba nuestra carta de derechos.

El representante de las víctimas tiene un papel importante que ejercer en esta audiencia. Consideramos que es vital poder intercambiar previamente a la realización de la audiencia con el representante de la Fiscalía para aportarle en la construcción del acto de acusación, será así de valía, que se examine con cuidado

la narración de los hechos jurídicamente relevante que sustentan la acusación para evitar así incurrir en solicitudes incongruentes que obstaculicen el éxito de las pretensiones en el fallo.

En equipo con la Fiscalía, será de gran importancia que el representante de las víctimas aporte a la teoría del caso de la Fiscalía, suministrándole los elementos materiales probatorios recaudados durante su investigación y que tengan vocación probatoria en el desarrollo del juicio oral. En sentido similar podrá aportar revisando que el escrito anexo en el que la Fiscalía descubre la evidencia física recaudada en la investigación, esté completo y bien presentado.

En el desarrollo de la audiencia, deberá participarse activamente estando atento a las posibles solicitudes de nulidad, de impedimentos, de recusaciones o de incompetencias que presente la defensa.

Finalmente en esta audiencia se podrá solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios en poder de la defensa. Si bien este no es el momento procesal en el cual tiene la obligación la defensa de descubrir sus elementos materiales probatorios y evidencias físicas, si es clara la norma al señalar que en caso de conocerse de un elemento específico, la Fiscalía podrá solicitar su descubrimiento. La corte en sentencia distinguida C-209 de 2007 extendió este derecho a los representantes de las víctimas.

Audiencia Preparatoria, Es este el momento procesal para que el representante de la víctima descubra los elementos materiales probatorios que fueron recaudados en sus pesquisas investigativas. Se problematiza en torno a si el descubrimiento a realizarse debe ser completo o sólo de aquellos elementos materiales probatorios que permitan sustentar la teoría del caso de la Fiscalía.

Es importante no olvidar que la persecución penal debe surtirse bajo el respeto estricto del debido proceso y el derecho de defensa, no puede aceptarse una participación que busque la prevalencia de nuestras pretensiones bajo cualquier costo. Debe existir un límite y este debe ser los derechos fundamentales. De igual manera y en esta línea argumentativa, consideramos que si el interés de las víctimas es la verdad, nada se opone para que el descubrimiento probatorio sea completo, es decir incluso de aquellos elementos que favorezcan la teoría del caso de la defensa.

Si la Fiscalía General de la Nación no descubrió en el momento procesal oportuno, un elemento material probatorio importante para sus pretensiones, podrá el representante de las víctimas incluirlo en su descubrimiento probatorio como propio, sin embargo consideramos que no debe hacerse un uso desleal de esta facultad, pues ello podría dar lugar a no descubrir oportunamente evidencia física que se pretende llevar al juicio, para que posteriormente el representante de las víctimas lo descubra en la audiencia preparatoria, sorprendiendo a la defensa. De hacerse así, le asiste el derecho a la defensa de solicitar una suspensión de la

audiencia para estudiar adecuadamente el nuevo descubrimiento probatorio y poder hacer uso del derecho de contradicción aportando, si así se considera, nuevas evidencias.

Los representantes de las víctimas deben estar atentos a las solicitudes probatorias del ente instructor, examinando que se haga completa y que se explique adecuadamente la pertinencia de cada uno de ellos. Hacerlo así garantizará que el juez decrete la vocación probatoria de la evidencia solicitada. En esta audiencia podrá el representante de la víctima solicitar al juez que decrete la vocación de sus elementos materiales recaudados durante la investigación y que pretenda llevar a juicio. En esta audiencia preparatoria la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo, o la inadmisibilidad de los medios de prueba de conformidad con los mandatos de la Corte en la sentencia C-209 del año 2007.

De esta suerte, la más reciente jurisprudencia en relación con el ejercicio de la acción civil y con los derechos de la víctima, antes que contribuir a la evolución de la temática, la hace involucionar, pues ahora se afirma que la acción civil es accesorio, subordinada y subsidiaria respecto de la penal, lo cual demanda que “el aspecto principal del proceso penal se debata sin las distracciones surgidas por las disputas que son comunes cuando se trata de determinar el monto de los perjuicios”.

Y por eso la Corte Suprema de Justicia, para garantizar que el proceso penal no se distraiga con discusiones que tienen que ver con aspectos accesorios o subsidiarios, como lo serían los derechos constitucionales de las víctimas a obtener reparación, justicia y verdad, propone “abandonar progresivamente la rígida regulación conforme a la cual la indemnización pecuniaria debe reclamarse en el curso del proceso [...] para pasar a la flexible fórmula establecida en Alemania y en países latinoamericanos como Paraguay y Venezuela, según lo ya visto, de permitir que ello ocurra aún con posterioridad a la firmeza de la sentencia [...]”.

Para la Corte Suprema de Justicia, entonces, por lo menos bajo la égida de la Ley 906 de 2004, lo que corresponde es que el ejercicio de las pretensiones de la víctima a obtener reparación (ya ni qué hablar de verdad y justicia) solamente debe tener lugar cuando exista una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, por lo que, en últimas, lo que se plantea es regresar a la regulación que existía en el año de 1858, donde, como se dijo, el ejercicio de la acción civil no podía intentarse dentro del proceso penal, y, en todo caso, sólo podía tener lugar ante la jurisdicción civil una vez mediara sentencia condenatoria del juez penal.

Como se ve, no obstante la reconceptualización y constitucionalización de las víctimas, nos encontramos hoy abocados a ofrecer soluciones similares a las que dispensaba nuestra legislación hace más de 150 años, en momentos en que el concepto de víctima era por entero extraño a los textos constitucionales.

Así ha evolucionado nuestra jurisprudencia en relación con las víctimas y sus derechos. Tal vez de todo esto lo rescatable sea que hoy por lo menos las víctimas tendrán que confrontar su realidad verdadera, en la cual volverán a ser tan solo un objeto de prueba, pues su participación en el proceso penal estará relegada a una intervención testimonial de la cual pueda extractarse algo que resulte útil a la condenación penal del acusado.

Lo otro, sus derechos constitucionales a reparación, verdad y justicia, en tanto aspectos “accesorios, subordinados y subsidiarios”, meros enunciados distractores de la actividad judicial del funcionario penal, deben buscar distintos escenarios. Hace 12 años, cuando terminaba mi participación en las xix Jornadas Internacionales de Derecho Penal, recordaba algunas palabras pronunciadas hace 23 años por el doctor Jaime Bernal Cuéllar, quien, en el marco de las x Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, decía:

Hagamos un alto en el camino, no continuemos desarrollando el derecho penal en la creencia que cumple su función absolviendo o condenando a las personas; busquemos algo más: dignificar al sujeto pasivo del delito, es decir, al perjudicado, a través de la institución conocida como “El restablecimiento del Derecho”. Lamentablemente, la involución de nuestra jurisprudencia, el desinterés del legislador y el sentprobatorgeneralizado de que para el nuevo proceso penal lo importante es garantizar la existencia de una característica foránea importada contra derecho y razón, como lo es el supuesto carácter adversarial del proceso acusatorio, nos llevan a considerar que las palabras del doctor Bernal Cuéllar, otrora inspiradoras, difícilmente pueden evocarse hoy como una legítima aspiración de quienes han sido victprozados con el delito, pues más se ajustan al epitafio de sus derechos.

20.CONCLUSIONES

El concepto de víctima manejado en el ordenamiento interno, es bastante amplio, pero su construcción básicamente ha nacido de la jurisprudencia, como se puede colegir de la sentencia C- 516 de 2007.

Las facultades de la víctima en la etapa de indagación, son mínimas, a tal punto, que la actuación de ésta se concibe es a partir de la formulación de imputación y no del hecho mismo, que es donde emerge su calidad y la posibilidad implícita de actuar dentro de la investigación.

En el juicio oral a la víctima se le cercena o coarta el derecho a probar y a contribuir para la construcción del caso que es de su máximo interés, a efectos de concretar el derecho a la verdad y la justicia, sin embargo paradójicamente con posterioridad a la evacuación de las pruebas, se le brinda la posibilidad de presentar alegatos de conclusión, ejerciendo así un tibio derecho de opinión.

Con el acto legislativo 03 de 2002 y el desarrollo del mismo a través del código de procedimiento probatorio penal, las ambiciones del legislador fueron más retóricas, ilusorias y prometedoras que lo verdaderamente plasmado referente a los derechos de verdad, justicia y reparación, de los cuales son titulares las víctimas, en virtud a que no se plasmaron los instrumentos eficaces para hacerlos valer de forma real.

La Ley 906 de 2004 fue regresiva al desarrollar normas a efectos de brindar una plena participación de las víctimas en las diferentes etapas del proceso penal, dejándolas sin herramientas efectivas para la materialización de sus derechos en el ejercicio legítimo de la acción penal, ya que consagró una norma rectora a manera de postulado general pero quedó inconclusa, toda vez que en un gran porcentaje la dejó por fuera de las circunstancias fácticas donde debería participar, generando con ello una omisión legislativa relativa, como técnicamente se menciona a través de las diferentes sentencias de constitucionalidad.

Las omisiones legislativas han sido objeto de complementación por la Corte Constitucional, que en sede de constitucionalidad, ha venido otorgando prerrogativas a las víctimas, permitiendo que participen en ciertas etapas procesales en igualdad de condiciones que Fiscalía y Defensa, en procura de garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación, participación que sin embargo no se ha extendido a la fase de indagación y juicio oral, donde su facultad de intervención se encuentra limitada, bajo el argumento que sus intereses se encuentran representados por la Fiscalía General de la Nación.

Para los autores de este trabajo investigativo, la representación que ostenta la Fiscalía General de la Nación no resulta suficiente, pues en muchas ocasiones las pretensiones de las víctimas no son compatibles con la tesis que maneja el ente

acusador, tensión que representa un desconocimiento de los derechos de las víctimas que se ven relegadas de la actuación penal, cuando no tienen la posibilidad de conocer el estado real de la actuación en la fase de indagación, así como tampoco participar de manera directa dentro del juicio oral.

Tanto a nivel interno, como a nivel internacional ha sido basilar la influencia ejercida por las jurisdicciones regionales de derechos humanos como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, que han realizado un aporte medular a la evolución progresiva del reconocimiento de los derechos de las víctimas en las legislaciones internas de los Estados Occidentales.

La Corte Constitucional a través de sus diferentes pronunciamientos respecto de los derechos de las víctimas en el proceso penal, no ha mantenido una tesis sólida y consistente si observamos la línea jurisprudencial construida y reflejada por este grupo académico, de tal suerte que ha manejado tres tesis básicas que son: la primera, referente a que la víctima solo le asiste el derecho de reparación; la segunda, relacionada con la plenitud de derechos que ostenta la víctima en el proceso penal en todas sus etapas, para ejercer sus derechos de verdad, justicia y reparación; y, la tercera, que podríamos llamar la intermedia, en la cual a pesar que reafirma sus derechos, los limita o restringe de cara al sistema de tendencia acusatoria adoptado en nuestro país.

Permitir que la víctima ofrezca un discurso puntual sobre la teoría del caso, y participe en los interrogatorios de peritos, testigos y acusados, no quebranta el principio de igualdad de armas que impera en el sistema, pues no se trata de convertir al ofendido en un tercer órgano acusador, sino al menos, permitir que así como el Juez de Conocimiento o el Ministerio Público realice preguntas complementarias cuando la situación lo amerite.

BIBLIOGRAFÍA

- DÍAS COLORADO, Fernando. Una mirada desde las víctimas: el surgimiento de la victprología. En Redalyc o Dialnet. [En línea] [Consultado Agosto 27 de 2011]. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30400915>> ó en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=UNA+MIRADA+DESDE+LAS+VICTIMAS%3A+EL+SURGIMIENTO+DE+LA+VICTIMOLOGIA&db=1&td=todo>.
- CHOCRÓN GIRALDEZ, Ana María. Fundamento constitucional de protección de las victpras en el proceso penal español, 31 de enero de 2008. [Consultado febrero de 2011]. Disponible en <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=FUNDAMENTO+CONSTITUCIONAL+DE+PROTECCION+DE+LAS+VICTIMAS+EN+EL++PROCESO+PENAL+ESPA%C3%91OL&db=1&td=todo.>>
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Diario oficial No. 44.097, Ley 600 del 24 de julio de 2000
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Diario oficial No. 45.657, Ley 906 del 31 de agosto de 2004.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Diario oficial No. 48.110, Ley 1453 del 24 de junio 2011.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Gaceta Constitucional 116 del 20 de julio de 1991.
- CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, Sentencia T-006 del 12 de mayo de 1992.
- CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, Sentencia T-538 del 29 de noviembre de 1994.
- CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. NARANJO MESA, Vladimiro, Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996.
- CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. SÁCHICA DE MONCALEANO, Martha Victoria, Sentencia C-215 del 14 abril de 1999.
- CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José y MONROY CABRA, Marco Gerardo, Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 2001.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, Sentencia T-046 del 15 de febrero de 1993.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MORON DIAZ, Fabio y MARTINEZ CABALLERO, Alejandro Sentencia C-093 del 27 de febrero de 1993.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, Sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. BARRERA CARBONELL, Antonio, Sentencia C-544 del 25 noviembre de 1993

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. HERNANDEZ, José Gregorio, Sentencia C-742 del 6 de octubre de 1999.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel Jose y MONTEALEGRE LYNET, Eduardo, sentencia C-228 del 3 de abril de 2002.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, sentencia C-578 del 30 de julio de 2002.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CÓRDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia T- 556 del 19 de julio de 2002.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MONTEALEGRE LYNET, Eduardo, sentencia C-451 del 3 de junio de 2003.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo, sentencia C-570 del 15 de julio de 2003.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. ARAUJO RENTERIA, Jaime, sentencia C- 775 del 9 de septiembre de 2003.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia C 014 del 20 de enero de 2004.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia C 114 del 12 de febrero de 2004.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, sentencia C 1154 del 15 de noviembre de 2005.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia C-1177 del 17 de noviembre de 2005

CORTE CONSTITUCIONAL , M.P. VARGAS HERNANDEZ, Clara Inés, sentencia C-591 del 9 de junio de 2005.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia C-979 del 26 de septiembre de 2005.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. ESCOBAR GIL, Rodrigo, sentencia C-047 del 1 de febrero de 2007.
CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. CORDOBA TRIVIÑO, Jaime, sentencia C-516 del 11 de julio de 2007.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo, sentencia C- 210 del 21 de marzo de 2007.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. PINILLA PINILLA, Nilson, sentencia C- 060 del 30 de enero de 2008.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. HENAO PEREZ, Juan Carlos, sentencia C- 409 del 17 de junio de 2009.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. GONZALEZ CUERVO, Mauricio, sentencia C- 250 del 6 de abril de 2011.

CORTE CONSTITUCIONAL, M.P. PALACIO PALACIO, Jorge Ivan, sentencia C- 260 del 6 de abril de 2011.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MP. B. AGUDELO, G.J., Casación de julio 15 de 1949, T. LXVI, No. 2073-2074, P.525.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Diario Oficial No. 40.190, Decreto ley 2700 del 30 de noviembre 1991.

FERRER C. María Josefina. La víctima y la justicia procesal penal venezolana desde la perspectiva victimológica. 2001, revista venezolana de análisis de coyuntural, enero julio, volumen VII, No. 001, Universidad Central de Venezuela, Caraca Venezuela, PP 199-225. [Consultado Febrero de 2011] <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/364/36470110.pdf>.

GALDÁMEZ ZELADA, Liliana. Protección de la Víctima, Cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones. En Dianlnet. [En línea]. [Consultado 20 de agosto de 2011].

<<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=LILIANA+GALD%C3%81MEZ+ZELADA&db=2&td=todo>>.

GAVIRIA LONDOÑO, Vicente Emilio. Estado actual de las víctimas en el proceso penal: evolución (¿involución?) Dogmática jurisprudencial y legislativa. [Consultado Febrero de 2011]. Disponible en <http://portal.uexternado.edu.co/irj/go/km/docs/documents/UExternado/pdf/5_derechoPenalCriminologia/numero89/Vicente%20Gaviria.pdf>

GAVIRIA LONDOÑO, Vicente Emilio. Víctimas, acción civil y sistema acusatorio. Tercera Edición. Bogotá. Departamento de Publicaciones, Universidad Externado de Colombia. Año 2011.

GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y CORONEL, Elisa y PÉREZ, Carlos. Revisión teórica del concepto de victimización secundaria. Liberabit. Revista de Psicología, Vol. 15, Núm. 1, 2009, pp. 49-58, Universidad de San Martín de Porres Perú. [Consultado febrero de 2011]. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68611923006>>

LAURENCE, Burgorgue-Larsen. Las víctimas del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la corte penal internacional. Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-720X, Nº. 12 - 2005, págs.10-32. [Consultado febrero de 2011]. Disponible en <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=1&t=las+victimas+del+delito+en+el+proceso+penal+internacional&td=todo>>.

MÁRQUEZ CÁRDENAS, Álvaro E. Las víctimas en el nuevo sistema procesal acusatorio y su reconocimiento por la Corte Constitucional. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D. C. Colombia - Volumen IX. - No. 18. - Julio - Diciembre 2006. [Consultado Febrero de 2011]. - ISSN 0121-182X. Págs. 127-152. Disponible en <<http://www.umng.edu.co/docs/revderecho/rev2de2006/prolegomenos-06.pdf>>.

MÁRQUEZ CÁRDENAS, Alvaro E. Actuaciones de las víctimas como sujetos procesales en el nuevo Sistema penal acusatorio. Derechos y valores, vol. XIII, núm. 26, julio-diciembre, 2010, pp. 11-28. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombiagotá. En Redalyc. [en Línea]. [Consultado Agosto 2 de 2011]. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=87617274002>>.

NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación general No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el pacto, 29 de marzo de 2004, Parr. 18.

PUENTE JOSE LUIS, disponible en:
<http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victi-02.html>.

NACIONES UNIDAS, ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

OLÁSOLO, Héctor. El estatuto de roma y la jurisprudencia de la corte penal internacional En materia de participación de víctimas En dialnet. [En línea]. [Consultado agosto de 2011]. Disponible en <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=EL+ESTATUTO+DE+ROMA+Y+LA+JURISPRUDENCIA+DE+LA+CORTE+PENAL+INTERNACIONAL+EN+MATERIA+DE+PARTICIPACION+DE+VICTIMAS&db=1&td=todo>>.

PIEDRA BUENA RICHARD, Guillermo. Cómo proteger mejor los intereses de las víctimas y de esta manera contribuir a la disminución de la delincuencia. Revista Chilena de Derecho, vol. 36, núm. 3, 2009, pp. 671-677. Pontificia Universidad Católica de Chile. En Redalyc. [En línea]. [Consultado Agosto de 2011]. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=177014524011>>.

REYNA ALFARO, Luis Miguel. Las Víctimas en el derecho penal I latinoamericano: Presente y perspectivas a futuro. En Dialnet. [En línea] [Consultado agosto 27 de 2011]. Disponible en <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=LAS+VICTIMAS+EN+EL+DERECHO+PENAL+LATINOAMERICANO%3A++PRESENTE+Y+PERSPECTIVAS+A+FUTURO&db=1&td=todo>>.

RINCÓN, Tatiana. Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Verdad Justicia y Reparación”. Primera Edición. Bogotá D.C., Editorial Universidad del Rosario. Año 2010.

SANPEDRO ARRUBLA, Julio Andrés. Las Víctimas del delito en los tiempos del olvido. Una reflexión desde la victimología en torno a la reforma al sistema penal en Colombia. Vniveristas, número 109, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. pp. 95-127. En Redalyc. [En línea]. [Consultado julio 20 de 2011]. Disponible en <<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82510903>>.

SentenciaC-651/11. Disponible en:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-651-11.htm>

ABOGADOS SIN FRONTERAS EN COLOMBIA, Representación de Víctimas. Elementos para una Estrategia en Defensa de sus Derechos.

GAVIRIA LONDOÑO VICENTE EMILIO, Estado actual de los derechos de las víctimas en el proceso penal: evolución (¿involución?) dogmática, jurisprudencial y legislativa

CONFERENCIA ESR RAMELLI – 2. Los derechos fundamentales de las víctimas de las violaciones graves a los Derechos humanos y al derecho internacional humanitario: el caso colombiano.

Disponible en la página:
www.eplo.eu/alfall/.../Conferencia%20Chile%20ESP%20Ramelli.pdf